

# Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

a



## **“El Censor Jurado de Cuentas frente al blanqueo de capitales: Riesgos y limitaciones del profesional como sujeto obligado ante la normativa”**

**Curso académico: 2019 -2020**

**Trabajo Fin de Máster**

**Presentado por:**

**D<sup>a</sup>. María Isabel Sánchez González**

**Dirigido por:**

**Dr. D. Alfonso Carlos García-Moncó Martínez**

**Alcalá de Henares, a 5 de octubre de 2020**

*“Los delitos llevan a las espaldas el castigo”*

*Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)*

## **AGRADECIMIENTOS**

Al Profesor Alfonso Carlos García-Moncó, por dirigir tan amablemente mi Trabajo Fin de Máster, dedicando parte de su tiempo a ello. La ayuda que me prestó, sus observaciones y enseñanzas, acompañaron a mi aprendizaje a lo largo de este camino.

A Moisés y Mónica. Su valiosa amistad levantó mi ánimo cuando lo necesité, ayudándome con ello, a concluir este proyecto. Siempre estuvieron muy cerca, a pesar de las distancias.

Y por supuesto, a mi familia que, respetaron durante este tiempo, mis horas de “aislamiento”, con la mayor comprensión.

## ABREVIATURAS

AEAT:	“Agencia Estatal de la Administración Tributaria”
BOE:	“Boletín Oficial del Estado”
CCEAG:	“Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo”
CGPJ:	“Consejo General del Poder Judicial”
CP:	“Código Penal”
EUROSTAT:	“Estadísticas Europeas”
FMI:	“Fondo Monetario Internacional”
FTF:	“Fichero de Titularidades Financieras”
FUNDAE:	“Fundación Estatal para la Formación y el Empleo”
GAFI:	“Grupo de Acción Financiera Internacional”
GAFILAT:	“Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica”
GAFISUD:	“Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur”
HP:	“Hacienda Pública”
ICAC:	“Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
ICJCE:	“Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”
INTERPOL:	“Organización Internacional de Policía Criminal”
LPBC/FT:	“Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo”
NIA-ES:	“Normas Internacionales de Auditoría aplicables en España”
PIB:	“Producto Interior Bruto”
SEPE:	“Servicio Público de Empleo Estatal”
SEPBLAC:	“Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias”
TIC:	“Tecnologías de la Información y la Comunicación”
UE:	“Unión Europea”
UIF:	“Unidad de Inteligencia Financiera”

## RESUMEN

El trabajo que presentamos a continuación, gira en torno a la figura del Censor Jurado de Cuentas y a su postura frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello bajo la perspectiva de una normativa que le repercute de manera directa.

Abordar el fenómeno del blanqueo de capitales objetivamente y, a la vez hacer una valoración del significado que representa en toda su extensión, así como intentar entender la repercusión que este puede llegar a tener, en el desempeño profesional del auditor de cuentas como pieza estratégica en la prevención de este delito, pasa necesariamente por situarlo en un entorno socioeconómico altamente internacionalizado.

El legislador, en su afán por prevenir los efectos negativos que conlleva esta actividad ilícita, ha desarrollado una normativa jurídica actual, donde los auditores de cuentas se configuran como sujetos obligados en la consecución de una serie de imposiciones, a las que deben enfrentarse bajo el paraguas de duras sanciones en caso de incumplimiento. Nos referimos a la *“Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE núm. 103 de 29 de abril).”* Eje fundamental de esta normativa.

Sin dejar de ser acertadas en todo momento, las pretensiones del marco jurídico en el que se contempla el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entendemos que, adolecen de algunas carencias susceptibles de, provocar riesgos y limitaciones en el desempeño del ejercicio profesional del auditor de cuentas. A pesar de todo ello, confiamos que, en un futuro cercano, con la entrada en vigor de nueva normativa a este respecto, gran parte de la problemática que afecta al sector de la auditoría quedará resuelta favorablemente.

**Palabras clave:** Censor Jurado, ejercicio profesional, blanqueo de capitales, entorno socioeconómico.

## SUMMARY

The work that we present below revolves around the figure of the Chartered Accountant and his position on money laundering and terrorist financing. All this from the perspective of a regulation that has a direct impact on it.

Approach the phenomenon of money laundering objectively and at the same time make an assessment of its meaning in its entirety, as well as try to understand the impact that this may have on the professional performance of the account auditor as a strategic piece in preventing it, necessarily passes by placing it in a highly internationalized socio-economic environment.

The legislator, in his desire to prevent the negative effects that this illegal activity entails, has developed current legal regulations where account auditors are configured as obligated subjects in the fulfillment of a series of obligations before which they must face under the umbrella of hard sanctions in case of non-compliance. We refer to “*Law 10/2010, of April 28, on the prevention of money laundering and terrorist financing (BOE no. 103 of April 29)*”. Fundamental axis of this regulation.

While the claims of the legal framework in which money laundering and terrorist financing are contemplated are always correct, we understand that it suffers from some shortcomings that may cause risks and limitations in the performance of the professional practice of the account auditor. Despite all this, we trust that, soon, with the entry into force of new regulations in this regard, a large part of the problems affecting the auditing sector will be resolved favorably.

**Keywords:** Certified Public Accountant, professional practice, money laundering, socioeconomic environment.

## ÍNDICE DE GRÁFICOS, TABLAS Y FIGURAS

Figura 1: Etapas del blanqueo de capitales .....	29
Gráfico 1: Denuncias al Ministerio Fiscal por delitos contra la Hacienda Pública Española en los años 2007 a 2018.....	32
Gráfico 2: Sentencias relativas al delito de blanqueo de dinero en los años 2008 a 2017 en los Tribunales españoles. ....,	37
Tabla 1: Sentencias delito blanqueo de dinero años 2008 a 2017, desglose.....	37
Gráfico 3: Asuntos y comunicaciones por indicio de sujetos obligados, de 2015 a 2018.....	55
Tabla 2: Asuntos y comunicaciones por indicio. Desglose de sujetos obligados de 2015 a 2018 .....	56

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>9</b>
<b>2. MARCO NORMATIVO.....</b>	<b>13</b>
2.1. Normativa nacional.....	16
2.2. Normativa comunitaria europea.....	18
2.3. Normas Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIA-ES) .....	18
<b>3. EL BLANQUEO DE CAPITALS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.....</b>	<b>20</b>
3.1. Concepto y definición de delito por blanqueo de capitales .....	21
3.2. Fraude fiscal Vs. Delito fiscal. En un contexto de blanqueo de capitales.....	30
3.3. Repercusión social y económica del blanqueo de capitales.....	34
3.4. Organismos internacionales y nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales .....	38
<b>4. EL AUDITOR DE CUENTAS ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALS.....</b>	<b>42</b>
4.1. El impacto de la normativa “antiblanqueo” en el ejercicio profesional del auditor de cuentas. ....	42
4.2. Obligaciones y responsabilidades del auditor de cuentas ante la normativa “antiblanqueo”.....	44
4.3. Identificación de problemas que repercuten en la profesión del auditor de cuentas como, consecuencia de la normativa “antiblanqueo” .....	60
4.4. Propuesta de soluciones a los problemas encontrados .....	65
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>73</b>
<b>6. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>77</b>
<b>7. COMUNICACIONES A PONENCIAS .....</b>	<b>78</b>
<b>8. WEBGRAFÍA .....</b>	<b>78</b>
<b>9. LEGISLACIÓN .....</b>	<b>79</b>
<b>10. JURISPRUDENCIA .....</b>	<b>81</b>
<b>11. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA VIGENTES EN ESPAÑA (NIE-ES). ....</b>	<b>81</b>
<b>ANEXO .....</b>	<b>82</b>



## 1. INTRODUCCIÓN

La actividad llevada a cabo como consecuencia a la prevención del blanqueo de capitales, dentro de la esfera global e internacional, donde las economías de todo el mundo se comportan de una manera cada vez más cambiante y dinámica. Provoca que esta tarea, sea complicada y laboriosa de llevar a buen término. Haciendo que, en ocasiones, la misma se transforme en una variable difícil de controlar para los gobiernos de prácticamente cualquier país.

En España, el blanqueo de capitales es usualmente conocido por “blanqueo de dinero”, siendo además considerado una infracción de carácter penal. En este sentido, en España, el Ordenamiento jurídico lo deja expresamente recogido en la “*Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (BOE núm. 281 de 24 de noviembre de 1995)*”, (en adelante CP), y más en concreto en los artículos 301, 302, 303 y 304.

Son muchas y variadas las maneras que se pueden utilizar para definir el blanqueo de capitales. De forma muy genérica, podríamos referirnos a este delito como el que persigue o tiene por finalidad, la introducción de una determinada cantidad de dinero en el sistema financiero de una economía, y cuya procedencia está vinculada directamente al hecho de haber cometido algún delito grave para su obtención. De tal forma que, una vez este dinero haya logrado entrar en el circuito financiero legal, el mismo, quede totalmente transformado en un dinero que poco o nada haga sospechar que pudiera proceder de alguna actividad ilícita.

El blanqueo de capitales, no siempre fue considerado un delito de gran trascendencia y gravedad, de hecho, no fue hasta hace relativamente poco tiempo, en torno a finales de los años ochenta, cuando abandonó su perfil secundario, para pasar a ser considerado como un delito de mayor importancia y calado, al que la Justicia empezó a prestar una mayor atención. Así las cosas, comenzaron desde estos años a sucederse modificaciones del CP y nueva legislación, para regular esta actividad delictiva que, no deja de aumentar desde entonces.

En lo esencial, para cometer este delito, es habitual que se esconda la intención de blanquear dinero, cuyo origen se encuentre en actividades o acciones ilícitas, pero no siempre es así. También se puede cometer el mismo, con motivo de un descuido o negligencia de carácter grave. Tal sería el caso, por ejemplo, el no haber comprobado con detalle la procedencia ilícita de una cierta cantidad de dinero. En España, los jueces y

tribunales no contemplan como requisito fundamental, el que exista una sentencia condenatoria anterior en la que se hubiere juzgado como delito, una actividad y un dinero que se intentó blanquear. Es suficiente en estos casos, determinar alguna relación de este dinero con actividades delictivas.

Sin lugar a duda, podríamos afirmar con rotundidad, que el blanqueo de capitales es un delito que afecta en la actualidad a casi la totalidad de países. Los sistemas financieros de muchas economías son conscientes, del veloz movimiento de grandes sumas de dinero a través de sus circuitos monetarios, lo cual favorece que la detección de múltiples transacciones ilegales no pueda ser localizada a tiempo. Esto supone la suma de una dificultad importante, puesto que esta forma de delincuencia deja un rastro en ocasiones muy complicado de seguir.

En estos últimos años, el legislador ha centrado su atención sobre el “lavado de activos” y con la *“Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de 28 de abril (BOE núm. 103, de 29 de abril de 2010)”*, (en adelante LPBC/FT), obliga a diferentes sujetos, entre los que se encuentran los Censores Jurados de Cuentas, a cumplir con rigurosidad una serie de imposiciones normativas, ante las que necesitarán agudizar todo su ingenio y pericia profesional para que, colaboren en la prevención de este delito, bajo el paraguas de duras sanciones en caso de incumplimiento. Por ese motivo se hace tan valiosa la colaboración de otros agentes, distintos a los Organismos oficiales, que termina siendo fundamental para su localización.

La LPBC/FT, tal y como refleja su título, gira en torno a la prevención. Razón suficiente por la cual, no debería en un principio, entenderse como una ley que busque como único objetivo la persecución de un delito. El legislador especifica en la LPBC/FT, a una serie de personas, con la intención de que estas colaboren de manera activa para alcanzar el objetivo que pretende esta ley, siendo el mismo como sabemos, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello, valorando el alcance de cada una de las actividades que estas personas desempeñan en los sectores económicos del sistema financiero español.

Teniendo presente lo anterior, opinamos que, el Censor Jurado, así como el resto de las personas que aparecen enumeradas en la LPBC/FT, y que se configuran como sujetos obligados en ella, deban colaborar de forma totalmente sensata a nivel social, con la plena aceptación de este encargo de manera solidaria, y siempre, en la práctica del ejercicio de su

actividad. Un compromiso y una solidaridad colaborativa en el marco de la profesionalidad que, sea percibida como tal y no tanto como la imposición de unas normas que puedan acarrearle negativas consecuencias. Todo ello acompañado del afán en la búsqueda de respuestas y posibles soluciones a cualquier inconveniente que pudiera surgir en el desempeño de su trabajo, y siempre con la intención de no incumplir en ningún momento la normativa impuesta.

Uno de los motivos que llevaron a la elección del tema que ocupa el presente trabajo, estuvo determinado fundamentalmente por la persona del Censor Jurado, quien ejerciendo su profesión y, considerando el dinamismo de sus actividades, se convierte en conocedor de un volumen considerable de información económico-financiera proveniente de los clientes a los cuales presta sus servicios. Quizás a menudo, este volumen de información se torna mucho mayor que, el que pudiera llegar a tener otro sujeto obligado por la misma normativa. Debemos tener en cuenta que, con la aparición reciente de nueva normativa en materia de blanqueo de capitales, donde las sanciones por este delito han sido modificadas de forma exigente, el Censor Jurado, se ha visto en la necesidad de sortear nuevas dificultades para llevar a cabo la realización de sus trabajos de auditoría, puesto que ante la exigencia de la normativa, muchos delincuentes financieros han agudizado su ingenio diseñando múltiples estrategias delictivas que, sin duda han puesto trabas al trabajo del auditor.

El auditor de cuentas generalmente no suele verificar solo unas pocas y posibles operaciones aisladas, susceptibles de irregularidades cometidas por un presunto delincuente, sino que va mucho más allá, teniendo a menudo acceso a numerosos datos de verdaderas redes de negocios empresariales, tras los que podría esconderse una auténtica trama de delincuencia. Puede, por tanto, el Censor Jurado, configurarse como un eslabón importante dentro de la cadena que representa la prevención del blanqueo de capitales.

En este orden de cosas, abordaremos en los próximos epígrafes, la repercusión que la actual normativa antiblanqueo, ha supuesto en la persona del auditor de cuentas, no solo desde una perspectiva profesional, que contemple la imagen y trayectoria de sus negocios, sino también la problemática que conlleva para estos profesionales el no cumplimiento de la normativa. Por otro lado, intentaremos en primer lugar, identificar objetivamente, cuáles son las dificultades de mayor transcendencia a las que, el auditor de cuentas debe enfrentarse en el cumplimiento de las obligaciones que, le son impuestas como sujeto

obligado, y seguidamente, pasaremos a dar respuesta a los posibles problemas encontrados, aportando algunas propuestas de solución coherentes al respecto.

Resulta del todo obvio que el tema que trataremos a continuación, se caracterizar por ser amplio, trascendente y de plena marcada actualidad. Son muy numerosos los documentos que hasta la fecha han sido publicados al respecto. La lucha en la prevención del blanqueo de capitales, como iremos mostrando en los próximos apartados, ocupa un lugar relevante en el Ordenamiento jurídico español, así como en el propio de un gran número de países. Motivo por el cual, no debe sorprender la extensa normativa puesta en vigor al respecto.

Juristas de reconocido prestigio y trayectoria, basan muchas de sus investigaciones en esta materia, con innegable maestría y profesionalidad. Por todo ello, teniendo en cuenta las limitaciones en la extensión de esta exposición, hemos querido concentrar en los siguientes epígrafes, de manera sintética, lo más relevante y significativo del asunto.

En los apartados que siguen a esta introducción, mostraremos una LPBC/FT, tal y como señala OLIUS BONSOMS<sup>1</sup>, desde:

*“...un enfoque basado en el riesgo incluido dentro del sistema preventivo y que en definitiva trata de que, a través de la adecuada aplicación por cada uno de los sujetos obligados del enfoque del riesgo de sus clientes, se consiga un uso más eficiente de los recursos de que dispone el país para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.”*

En lo esencial, hemos perseguido un objetivo primordial en el momento de emprender la elaboración de este trabajo, que no es otro que exponerlo al lector siempre desde una óptica legislativa actualizada, mostrando, en base a nuestro criterio, qué riesgos y limitaciones son los más significativos a los que debe enfrentarse el Censor Jurado o auditor de cuentas como experto, al ejercer su profesión en el sector de la auditoría y por supuesto, valorando en todo momento, su condición de sujeto obligado por la LPBC/FT y resto de normativa aplicable. Para la consecución del objetivo de este trabajo, que en líneas

---

<sup>1</sup> OLIUS BONSOMS, Yolanda. “Blanqueo de capitales y su efecto sobre los auditores de cuentas”. Revista Contable, N.º 14, Sección Auditoría, septiembre 2013, Editorial Wolters Kluwer España (14) p 82-89.

generales consiste en la identificación de la problemática que afecta al Censor Jurado como consecuencia de su condición de sujeto obligado por la normativa antiblanqueo, y la propuesta de posibles soluciones al respecto que ayuden a minimizar los mismos. Hemos tenido muy presente en todo momento y de manera constante, la normativa actual donde queda regulada y tipificada jurídicamente la actividad de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Fundamentalmente y como expondremos más adelante, a través de la LPBC/FT.

Así como también, hemos acudido a consultar bases de datos e información accesibles al público, procedentes de Organismos oficiales, tales como: AEAT, FMI, ICJCE, SEPBLAC, Poder Judicial de España, y Tesoro Público, entre otros, cuya información tanto documental como estadística, nos ayudó a complementar el tema que se presenta a continuación. Nos gustaría poner especial énfasis en subrayar, que todos los datos incluidos en este trabajo han sido contrastados y verificados convenientemente, estando basados en su totalidad, en distintas fuentes que, dada su procedencia, hemos considerado del todo fiables.

En el desarrollo de este documento, nuestra intención siempre fue abordar el tema poniendo el foco de atención, en la individualización de la problemática que afecta de una forma directa al Censor Jurado en el desempeño de su profesión y, que viene en parte motivada como consecuencia a la amplia batería de obligaciones y deberes que, en su obligado cumplimiento, debe llevar a cabo. Para ello con la intención de facilitar la comprensión al lector, el texto ha sido dividido en dos grandes apartados, el primero ofrecerá una definición ampliada de la noción de blanqueo de capitales, situándolo en un contexto económico y social. El segundo de los apartados se centrará en la problemática propia del ejercicio de la profesión ante la normativa antiblanqueo, donde se intentará dar respuesta y se propondrán posibles soluciones a la misma. Para finalizar, serán expuestas una serie de conclusiones que, a modo de síntesis, detallarán lo más relevante del tema objeto de análisis, aportando una visión general y cercana de este.

## **2. MARCO NORMATIVO**

A continuación, procederemos a exponer de manera explícita y sintética, una breve reseña de la legislación más reciente que aglutina la normativa antiblanqueo y que se encuentra en vigor. La que ocupará un mayor protagonismo en este trabajo, y que, en

nuestra opinión, también lo representa en el marco normativo, es la *“Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.”* Cuyo objeto tal y como aparece señalado en su artículo 1. Es: *“...la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.”*

La LPBC/FT, aparece publicada en el *“Boletín Oficial del Estado”* con fecha 29 de abril de 2010, produciéndose su oficialidad un día después de su publicación. Encontrándose en todo momento en concordancia con la normativa comunitaria en esta materia. Con la aprobación de esta ley, se mantiene en vigor la *“Ley 12/2003 de 21 de mayo de prevención y bloqueo de financiación de terrorismo”*, aunque queda derogada la *“Ley 19/1993 de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.”*

No obstante, algo más de dos años después, la LPBC/FT de 28 de abril, es modificada en aspectos relevantes, a través de la disposición final sexta de la *“Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295 de 10 de diciembre).”* En las novedades introducidas con motivo de la publicación de esta nueva ley, son de resaltar algunas importantes, como, por ejemplo, las que hacen referencia expresa a las medidas simplificadas de diligencia debida y que afectan a los sujetos obligados en la normativa, lo cual aparece señalado en los artículos 9 y 10 de la citada ley. Así, en su artículo 9, se determina que: *“Los sujetos obligados podrán aplicar...medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”*, y el artículo 10, señala que tales medidas simplificadas, deberán siempre ser aplicadas en concordancia con el riesgo, que conlleve la operativa.

Otra de las importantes modificaciones que nos gustaría destacar en este epígrafe, viene determinada por el artículo 14 de la citada ley y, hace alusión directa a las personas con algún tipo de responsabilidad pública, ante las que el sujeto obligado por la normativa, haciendo también alusión en este caso, a los Censores Jurados, deberá tomar medidas reforzadas de diligencia debida. Por medio del *“Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, queda aprobado el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril (BOE núm. de 6 de mayo, corrección de errores publicada en BOE núm. 186 de 1 de agosto de 2014)”*.

Asimismo, nos gustaría mencionar el **esperado** “*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 214 del 4 de septiembre).*” Estructurado en V títulos, donde el II de estos títulos, recoge de forma precisa las modificaciones de la IV “*Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.*”

Una de las principales razones por las cuales centramos nuestra atención, en el “*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (BOE núm. 214 de 4 de septiembre)*”, se deriva en gran medida a las importantes novedades que introduce con respecto a la anterior normativa. Una de estas novedades hace referencia al incremento en los montantes económicos máximos de las sanciones, manteniéndose no obstante los importes mínimos. Otra novedad viene promovida, al hacer mención en torno a la habilitación de nuevos conductos o caminos para proceder a la denuncia formal de, “operaciones sospechosas” y susceptibles de blanqueo, a través de los que el sujeto obligado, en nuestro caso el Censor Jurado, debe formalizar la comunicación de las operaciones ilegales o conductas susceptibles de blanqueo de capitales que pueda detectar en la realización de su trabajo. Además, se vuelve importante la representación del **fideicomiso**<sup>2</sup>, como pieza fundamental en la prevención de este delito.

Para finalizar este apartado, únicamente hay que recordar que, con la entrada en vigor de la LPBC/FT, legislación esta de carácter marcadamente básico, el legislador procede a unificar la normativa anterior en materia de prevención de blanqueo de capitales y

---

<sup>2</sup> SEPBLAC (2019): *Guía de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en relación con los fideicomisos anglosajones (trusts) y otros instrumentos jurídicos similares*: “El fideicomiso anglosajón (en lo sucesivo trust) es una figura originaria del derecho inglés en virtud de la cual una persona (fiduciario o trustee) controla bienes o derechos con un fin determinado o en beneficio de un tercero...es un instrumento jurídico que ha experimentado un gran desarrollo y que cumple un importante papel en el tráfico económico internacional. Ello, no obstante, su opacidad lo hace propicio al abuso y su empleo en esquemas de blanqueo de capitales está bien documentado. Aunque, el trust es un instrumento ajeno al ordenamiento jurídico español, la creciente internacionalización de las relaciones económicas puede dar lugar a que los sujetos obligados establezcan relaciones de negocio o intervengan en operaciones con trusts constituidos con sujeción a la legislación de Estados terceros.” Pág.1

financiación del terrorismo, con la intención de poner límite a su dispersión, hasta entonces evidente.

Seguidamente, de forma cronológica, en orden descendente a su entrada en vigor, con mejor detalle, mostraremos una relación del marco normativo nacional en esta materia. Inmediatamente después, mencionaremos las últimas y más recientes “*Directivas Comunitarias del Parlamento Europeo y del Consejo*”, sobre la prevención del blanqueo de capitales.

No estaría completa a nuestro parecer, esta relación, donde hemos detallado el marco normativo más actual que afecta a la normativa de auditoría en materia de prevención de blanqueo de capitales, si olvidásemos mencionar en ella, las “Normas Internacionales de Auditoría”, aplicables en España en la actualidad, por el “*Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)*”. En este caso, estamos señalando a las NIA-ES. Una relación de estas, por tanto, dará por finalizado el presente epígrafe.

## **2.1. Normativa nacional**

- “*Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, para trasponer la Directiva de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (BOE núm. 45 de 21 de febrero de 2019).*”
- “*Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010) Referencia: BOE-A-2010-9953* ”
- “*Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999)*”
- “*Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE) núm. 281, de 24 de noviembre de 1995 Referencia: BOE-A-1995-25444*”
- “*Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE) núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-12887.*”



- *“Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 103, de 29 de abril de 2010 Referencia: BOE-A-2010-6737.”*
- *“Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. (BOE) núm. 160, de 05 de julio de 2003 Referencia: BOE-A-2003-13471.”*
- *“Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 122, de 22 de mayo de 2003 Referencia: BOE-A-2003-10289.”*
- *“Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE) núm. 214, de 4 de septiembre de 2018 Referencia: BOE-A-2018-12131.”*
- *“Real Decreto-ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, (BOE núm. 78 de 31 de marzo de 2012) Referencia:BOE-A-2012-4441”*
- *“Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. (BOE) núm. 129, de 30 de mayo de 2015 Referencia: BOE-A-2015-5952.”*
- *“Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 110, de 6 de mayo de 2014, BOE-A-2014-4742. (corrección de errores publicada en BOE núm. 186 de 1 de agosto de 2014). Referencia: BOE-A-2014-8278.”*
- *“Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, («Gaceta de Madrid» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882)”*

## 2.2. Normativa comunitaria europea

- *“DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. (DO L 284/22 de 12 de noviembre de 2018).”*
- *“DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE. (DO L 156/43 de 19 de junio de 2018).”*
- *“DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. (DO L 88/6 de 31 de marzo de 2017).”*
- *“DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión. (DO L 141/73 de 5 de junio de 2015).”*

## 2.3. Normas Internacionales de Auditoría en España (NIA-ES)

En la relación que mostraremos a continuación, obviamente, no están incluidas la totalidad de normas que conforman el conjunto de las NIAS-ES. Únicamente hemos seleccionado para este epígrafe, aquellas que, en nuestra opinión, de alguna manera, bien directa o indirectamente, contienen o hacen alusión a referencias importantes, y de las que Censor Jurado conviene que, tenga en consideración en el ejercicio de su profesión conforme a su postura de sujeto obligado por la normativa, y más en concreto, por la LPBC/FT. Es fundamental que preste atención a su contenido, puesto que el mismo puede

constituir una herramienta valiosa que le ayude en la detención de, alguna operativa susceptible de blanqueo de capitales en el ejercicio de su profesión.

- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 200: OBJETIVOS GLOBALES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA-ES 200) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 240: RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE (NIA-ES 240) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 250: CONSIDERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS (NIA-ES 250) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 300: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS (NIA-ES 300) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 315: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y DE SU ENTORNO (NIA-ES 315) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 330: RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS VALORADOS (NIA-ES 330) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*

- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 500: EVIDENCIA DE AUDITORÍA (NIA-ES 500) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*
- *“NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 620: UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPERTO DEL AUDITOR (NIA-ES 620) (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013).”*

### **3. EL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

En los primeros párrafos de la introducción de este trabajo, hicimos referencia a cómo el CP español incluye una regulación de este delito, dentro de su articulado y formulamos una somera descripción del concepto, comúnmente denominado “blanqueo de dinero.” En el contenido de este epígrafe, parece incluso fundamental desarrollar una descripción algo más detallada de este grave delito. Para ello, tanto la normativa nacional como la internacional han formulado, numerosas definiciones que son capaces de describir con gran precisión el objeto de esta práctica delictiva, todas ellas haciendo alusión a la clave fundamental que engloba este tipo de delitos, que no es otra que dotar de una apariencia legal a determinados montantes de dinero que, no tienen en su origen.

En este contexto, podemos decir que, este tipo de prácticas de blanquear dinero no es otra cosa que encubrir o disfrazar la procedencia de dinero ilegal. Dinero que, fue obtenido casi en su totalidad, por la realización de operaciones ilícitas o delictivas, para darle apariencia de dinero de curso legal que circulará libremente dentro del sistema financiero, de forma absolutamente legítima. Es comúnmente conocido que, ante la imposibilidad de justificar el origen legal de una determinada cantidad de dinero, es cuando el presunto delincuente, busca la manera de proporcionarle una apariencia legítima.

### 3.1. Concepto y definición de delito por blanqueo de capitales

En un contexto objetivo y para forjar una primera idea que, condense a lo que nos queremos referir cuando mencionamos blanqueo de capitales. Hemos de visualizar necesariamente actividades ilícitas e ilegales. Dinero que, para tomar apariencia legal e introducirse en un circuito financiero autorizado, necesita poner en marcha maniobras más o menos maliciosas por parte de alguien. Es importante apuntar, que al mencionar “actividades ilícitas” nos referimos a aquellas que se relacionan con un delito, como puede ser el narcotráfico, y por las que resulta sencillo obtener capitales con la intención de que estos terminen introduciéndose en el sistema financiero con una apariencia completamente legal.

Existen otras maneras de obtener dinero ilegal, por ejemplo, la que viene representada por el hecho de incumplir el pago de impuestos, es decir la no tributación, como consecuencia de haber realizado algún tipo de operación que conlleve aparejado un ingreso para la Hacienda Pública, (en adelante HP). Por ejemplo, pensemos en una ganancia patrimonial no declarada. Con esta segunda hipótesis, entendemos que sería incorrecto hacer alusión al concepto de blanqueo de capitales, ya que la ganancia que se obtiene por esta actividad no tiene un origen ilícito. Se trata, de un dinero obtenido pero que fue ocultado oficialmente a la HP. Lo correcto en este caso sería, hacer una referencia al fraude fiscal, en un principio. Aunque en este sentido, haciendo alusión, a la LPBC/FT, en su artículo 1.2, tendríamos en cuenta lo siguiente:

*“...se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.”*

En un contexto histórico, PÉREZ RODRÍGUEZ<sup>3</sup>, nos viene a decir que:

*“...tradicionalmente, muchos países tomando como referencia una postura interesada, han favorecido de alguna forma el tránsito de capitales hacia su propio país,*

---

<sup>3</sup> PÉREZ RODRÍGUEZ, M. D. (Coord.). (2015). “Prevención del blanqueo de capitales” (2a. ed.). Editorial ICB. S.L.

*con la intención de favorecer la entrada de capital al mismo, lo cual sin duda viene a favorecer el desarrollo económico en detrimento de los países vecinos que competían en mercados internacionales. Motivo por el cual muchos países tenían una legislación débil y prestaba escasa atención al blanqueo de capitales. Provocando una permisividad fiscal.”*

No debe sorprender entonces que, con estos antecedentes históricos, algunos países, en un pasado no muy lejano, vieran en esta manera de proceder, el escenario perfecto para el avance de sus economías, e hicieran de esta actividad algo habitual en su sistema financiero.

En relación con la problemática expuesta, GARCÍA-MONCÓ MARTÍNEZ<sup>4</sup>, señala lo siguiente:

*”... la conveniencia de recordar que entre los delitos que pueden estar en el origen del blanqueo de capitales, se encuentra el de delito fiscal, regulado en el artículo 305 del Código penal que, como es sabido, aparece cuando se defrauda una cantidad igual o superior a 120.000 € en la cuota de un tributo y por un periodo tributario”*, además nos señala en relación con lo anterior: *”... se debe tener en cuenta su relación en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, art. 133.2 de su Texto Refundido, donde queda establecida una presunción de que los bienes que no se encuentran contabilizados, pero en posesión de la Sociedad se presumirán que son de su propiedad.”*

Es por todo ello que, se debe tener en consideración que durante años este fue un tema de discusión y todavía lo es, aunque, bajo una perspectiva jurídica, la Jurisprudencia es muy clara a este respecto, cuando hace referencia a si el delito contra la HP en cuotas defraudadas superiores a 120.000 euros, por cualquier circunstancia, ya sea por voluntad deliberada o intencionadamente, puede considerarse o no un delito preliminar al delito de blanqueo de capitales. Nos queremos referir en este caso a la STS 974/2012, de 5 de diciembre. A este respecto, DE CUERDA MARTÍN<sup>5</sup> (2017), analiza la mencionada sentencia en su trabajo y concluye: *“...efectivamente el delito fiscal en su modalidad de elusión tributaria puede ser considerado como un delito previo al blanqueo de capitales.”*

---

<sup>4</sup> GARCÍA-MONCÓ Martínez, A. En: *“Las obligaciones de información de las empresas en materia tributaria y en el ámbito de la legislación.”* Gaceta fiscal. 2012. (323) p 60-74.

<sup>5</sup> DE CUERDA MARTÍN, M.: *“El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales”*. (2017), Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, (12), 93-175.

Hoy en día no existen muchas dudas, y puede afirmarse, como efectivamente un delito en contra de la HP puede conformarse, en algunos casos concretos, como la antesala perfecta a un delito por blanqueo de capitales.

En el próximo epígrafe, nos ocuparemos con mayor detalle a comentar estos interrogantes, ahora nos quedaremos con una sola idea; el delito de blanqueo de capitales puede ser resuelto administrativa o penalmente y, de nuevo haciendo referencia al CP, y al artículo 305 apartado 1, recordaremos su contenido a continuación:

*“El que, por acción u omisión, de fraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria...”*

Obviamente, resulta sencillo, imaginar la existencia de múltiples definiciones que podrían aplicarse si lo que pretendemos es elaborar una descripción, más o menos acertada en torno al concepto de blanqueo de capitales. Igualmente podríamos imaginar que son muchas las maneras y formas que el presunto delincuente blanqueador, puede idear para conseguir llegar a la consecución de su meta, es decir transformar el dinero obtenido de forma ilícita dándole una apariencia legal cuando antes carecía de ella.

Básicamente, la táctica por la cual se realiza el “lavado de capitales” suele tener su origen en transferencias bancarias, que mueven el dinero de un lugar a otro. Siempre y a ser posible, en importes reducidos, de manera que grandes sumas de capital fraccionadas en pequeñas operaciones, se vayan introduciendo lentamente en el sistema financiero legal, alejando este dinero del foco en el que se produjo el delito inicialmente. En numerosas ocasiones, si fuera posible incluso, transfiriéndolo a lugares de baja o inexistente tributación o bien, paraísos fiscales, donde el rastro es más difícil de perseguir.

Por otro lado, al referirnos a la “financiación del terrorismo”, lo que estamos haciendo es una alusión al modo en que este dinero una vez “blanqueado o lavado” y de procedencia ilegal, es puesto a disposición del delincuente que lo empleará en financiar o contribuir con él, a distintas actividades terroristas. Existe, por tanto, un alto porcentaje de probabilidad

de que esta circunstancia haya motivado al legislador a tomar una importante decisión al respecto, dejando constancia de alguna manera en la normativa, de la interrelación existente entre el blanqueo de capitales y el terrorismo. De esta manera, en nuestra opinión, hacer alusión en la LPBC/FT a ello, a lo largo de todo su articulado, está del todo justificado.

En este orden de planteamientos, entendemos que no sería muy desacertado comentar, que la financiación del terrorismo no es exactamente un blanqueo de capitales, pero si puede llegar a ser una consecuencia, de haberse cometido previamente aquel.

Lamentablemente, en los últimos años, hemos sido testigos de cómo en ocasiones actividades terroristas de gran trascendencia y calado, se han producido sin la necesidad de poner en movimiento grandes sumas de capital, basta por ejemplo con hacer frente al alquiler de un vehículo para provocar auténticas masacres terroristas. Actividades estas, que en otros tiempos hubieran requerido la necesidad de poner en movimiento una cantidad importante de dinero para poder llevarlas a cabo.

Para ubicar en un contexto histórico temporal el blanqueo de capitales, ya apuntamos en la introducción de este trabajo, como este delito, hace tan solo unas pocas décadas, era considerado un delito de índole más bien secundaria por la Justicia. A partir del año 2001, y a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre a las “*torres gemelas*” de Nueva York, fue cuando empezó a aumentar la preocupación de este delito en numerosos gobiernos y países. Aun así, durante los años 80, estas ideas comenzaron a ser enfocadas de una forma muy diferente. El entorno económico y la sociedad al completo, estaban empezando a dar un giro que estaba destinado a cambiar las cosas. La delincuencia aumentaba exponencialmente en un entorno marcado por el narcotráfico, lo que terminó irremediablemente desembocando, en la aprobación de nuevas leyes que intentaran contener de alguna forma tan compleja situación.

Casi entrados los años 90, comienzan a implementarse una serie de políticas en muchos países, que tienen como finalidad la limitación, o dicho de un modo más acertado, la prevención de los delitos relacionados con el ámbito financiero, y que tengan un origen delictivo muy relacionado con actividades básicamente ilícitas. Resulta obvio, como en la LPBC/FT, y más concretamente en su preámbulo, el legislador muestra una preocupación manifiesta hacia comportamientos que puedan desembocar en el “crimen organizado” que, pongan en peligro la seguridad financiera de la economía. A lo largo del tiempo, como



hemos podido observar después de la publicación de numerosa normativa en esta materia, todo esto llevó implícito, un importante ajuste político, no solo nacional sino también internacional. Así en el año 1989 tiene lugar la creación del “*Grupo de Acción Financiera*” (GAFI)<sup>6</sup>.

Asimismo, consideramos que es importante, en este trabajo, hacer referencia al artículo 301 del CP, que reza como sigue a continuación:

*“El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años...”*

Es conocido, como especialmente durante las crisis económicas, muchas personas se prestan a participar en actividades “turbias”, que tienen una evidente relación con el blanqueo de capitales. Personas que mueven cantidades de dinero de un lugar a otro sin importarles su procedencia, obteniendo un porcentaje de comisión en base al montante del capital trasladado. Por ejemplo<sup>7</sup>, son numerosas las personas que durante la crisis que se inició en 2008 fueron contactadas para realizar transferencias a diversas cuentas bancarias desde sus propias cuentas, sin preguntar la procedencia del dinero que debían transferir, ni quienes serían los verdaderos titulares, de estas cuentas bancarias donde se efectuarían los depósitos, todo a cambio de obtener un beneficio económico por ello. El afán de ambición

---

<sup>6</sup> GAFI en inglés: “*Financial Action Task Force*” (FATF): “*El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El organismo intergubernamental establece estándares internacionales que apuntan a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Como organismo de formulación de políticas, el GAFI trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas áreas...*”. (2020). Página oficial de internet.

<sup>7</sup> Este ejemplo fue expuesto por GARCÍA FRESNO, M. “*jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. En una ponencia que tuvo lugar los días 10 y 11 de febrero de 2020 en el Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD)*”

llevó a estas personas a que fueran condenadas por blanqueo de capitales, a pesar de no ser sujetos obligados en la normativa. La imprudencia les convirtió definitivamente en delincuentes.

Tiene sentido afirmar que cuando alguien está participando en una actividad para percibir un beneficio económico y, esta actividad encierra un comportamiento ilícito anterior. Ese beneficio económico que obtiene el que está participando se considera que procede de la propia actividad anterior por blanqueo. Dicho de otro modo, más simple: aquel que haga “algo” con dinero proveniente de otro delito, también se convierte en un delito.

No queremos detenernos en este trabajo que nos ocupa, en hacer un relato de las múltiples formas que el presunto delincuente blanqueador de capitales es capaz de encontrar para llevar a término sus intenciones ilícitas. No obstante, haremos un pequeño inciso en mencionar muy brevemente a los casinos de juego, ya que los mismos, al igual que los auditores de cuentas, también se encuentran clasificados como sujetos obligados ante la normativa antiblanqueo, con la peculiaridad de que, siendo sujetos obligados, a su vez pueden encontrarse bajo la supervisión de otro sujeto obligado, en este caso los auditores de cuentas. En este sentido, GÁLVEZ BRAVO (2014)<sup>8</sup>, hace la siguiente observación:

*“...Cuando hablamos del blanqueo de capitales a través de casinos, lo podemos hacer desde una doble vertiente: a) como empresa tapadera configurada a este fin, y b) utilizar el casino como una institución no financiera que blanqueo dinero (si quiera sea de manera involuntaria).”*

Entendiendo obviamente, que el casino de juego como tal, cumpliera los requisitos necesarios para estar obligado a la auditoría de sus estados financieros, por parte de un Censor Jurado.

En relación con todo lo anteriormente comentado, nos parece importante incluir en este epígrafe, una definición más del blanqueo de capitales. En esta ocasión, acudiremos a la Normativa Internacional Comunitaria. Para ello, nos gustaría hacer referencia a la:

---

<sup>8</sup> GÁLVEZ BRAVO, R. “Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales.” Editorial Bosch Wolter Kluwer, Barcelona (2014). p. 83

*“Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.”* Nos gustaría señalar, de manera especial que con fecha 10 de enero de 2020, finalizó el plazo de trasposición de la mencionada Directiva.

Teniendo entonces en consideración la aludida *“Normativa Internacional Comunitaria”*, y conforme a lo señalado en ella a este respecto, podríamos de forma somera, referirnos al significado de blanqueo de capitales, de la siguiente manera:

- *“La transformación o transmisión de bienes, con la certeza de que los mismos son producto o proceden de alguna actividad ilegal o hecho delictivo o de su participación en cualquier tipo de actividad relacionada directa o indirectamente con ellos.”*
- *“Todo ello con la intención certera de encubrir su origen ilícito o de colaborar y ayudar a personas que se encuentren implicadas en dicha actividad a eludir responsabilidades jurídicas derivadas de este suceso.”*
- *“La ocultación o el encubrimiento del nacimiento, adquisición, posesión o uso de bienes, con el conocimiento de que estos tienen procedencia ilícita o de que pueden proceder de la misma. La simple y sola participación en alguna operación anterior.”*

Cabe resaltar al respecto, que la definición anterior, extraída en forma de resumen, de la *“Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018”*, última Directiva (UE), encierra un planteamiento muy similar a la definición que podemos extraer de la normativa nacional, ya que el trasfondo y lo que intenta transmitir es básicamente lo mismo. Por ese mismo motivo, opinamos que resulta muy acertado, cuando se hace referencia al blanqueo de capitales, situarlo necesariamente en un contexto internacional, en su más amplio sentido.

Nos gustaría comentar en este análisis, a propósito de la V Directiva (UE), aunque de forma somera, alguno de los aspectos más relevantes que incorpora la misma como novedad en su contenido, estando alguno de los mismos, de manera significativa, muy relacionados con ejercicio profesional de Censor Jurado:

- Con respecto a la consideración de sujeto obligado: No se refiere únicamente a los auditores, contables y asesores fiscales, sino que también a: *“cualquier otra persona que se comprometa a prestar, directamente o a través de terceros con los que esa otra persona esté relacionada, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal”*
- Otra novedosa modificación, pone en escena a nuevos sujetos obligados en la normativa antiblanqueo, añadiendo a: *“los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias”*, también son añadidos: *“...los proveedores de servicio de custodia de moneda electrónica así como personas que se dediquen a comerciar con obras de arte o que actúen como intermediarias en el comercio de las mismas, ya sea en subastas o en galerías de arte siempre que el importe el importe relacionado con dichas transacciones sea igual o superior a 10.000 euros. También se considerarán sujetos obligados las personas que almacenen obras de arte, comercien con ellas o actúen como intermediarios en el comercio, si el importe de estas sea igual o superior a 10.000 euros.”*
- En lo referente a los agentes inmobiliarios como sujetos obligados, se añade: *“... también cuando actúen como intermediarios en el arrendamiento de bienes inmuebles, pero únicamente en relación con transacciones para las que el alquiler mensual sea igual o superior a 10.000 euros.”*
- Relacionado con las diligencias debidas, aparecen cambios importantes, que incluyen aspectos a tener en cuenta, como son por ejemplo la identidad del cliente y la comprobación de su coincidencia a través de documento oficial, quedando ampliado el contenido de la norma tal y como sigue a continuación: *“la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes incluidos, cuando estén disponibles, los medios de identificación electrónica, los servicios de confianza pertinentes a tenor del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, o cualquier otro proceso de identificación remota o electrónica segura, que hayan regulado, reconocido, aprobado o aceptado las autoridades nacionales competentes.”*

Asimismo, la Normativa Internacional, también hace referencia expresa al concepto de financiación del terrorismo. En este sentido, la *“Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento*

*Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018”, viene a decir resumidamente lo siguiente: “...todo suministro o recogida de fondos, con independencia del medio por el que se produzca, ya sea de una manera directa o indirecta, y que posteriormente vaya a ser utilizado, o simplemente se tenga la intención de hacerlo, en actividades que conlleven la comisión de un delito, se considerará que lleva aparejada una financiación terrorismo.”*

A continuación, para finalizar este apartado, que será previo a profundizar con mayor detalle en el tema central de este trabajo, mostraremos seguidamente una figura, extraída del manual elaborado por EUROSTAT<sup>9</sup>, en el año 2018, que resume de manera muy sintética, las tres fases que componen, o en las que podría dividirse, el proceso de lavado de capitales, con el objeto de proporcionar al lector una visión panorámica de este fenómeno global.

**Figura 1**



*“...Las formas, maneras y métodos que se pueden imaginar para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero son numerosos, resultando cada vez más sofisticados y difíciles de detectar y controlar. Resulta complicado llegar a un consenso a fin de determinar si en cada uno de los casos que se detectan de blanqueo, se sigue un método o*

<sup>9</sup> EUROSTAT: “Oficina Estadística de la Unión Europea, se encarga de publicar estadísticas e indicadores de alta calidad a escala europea que permitan hacer comparaciones entre países y regiones.”

La figura ha sido extraída del Informe, (Texto original en inglés): “Handbook on the compilation of statistics on illegal economic activities in national accounts and balance of payments” (2018). Elaborado por Comisión Europea. EUROSTAT y disponible en el sitio oficial de internet. Pg. 73

*patrón de actuación específico o si por el contrario cada caso es radicalmente distinto a los demás en cuanto al procedimiento utilizado”<sup>10</sup>.*

En lo esencial, el “*Grupo de Acción Financiera Internacional*”, GAFI, tras haber analizado en profundidad, las dimensiones de lo que suponía el blanqueo de capitales en el entorno del sistema financiero internacional, llegó a la conclusión de que estas eran las etapas más idóneas para definir de una manera sencilla en qué consistía esta actividad ilícita. Estas etapas, fueron dispuestas en orden de consecución, siguiendo un camino lógico, perfectamente ilustrado.

### **3.2. Fraude fiscal Vs. Delito fiscal. En un contexto de blanqueo de capitales**

En el epígrafe que presentamos a continuación, partiremos de una premisa importante, advirtiéndole al lector la necesidad de distinguir, los conceptos de fraude y delito fiscales en escenarios diferentes para su correcta comprensión, así como sugerirle, que tenga en todo momento la precaución de no confundir fraude fiscal, con delito del fraude fiscal, puesto que este último no existe. Así las cosas, a continuación, de forma somera, con la intención de no extender más de lo necesario, una explicación que pueda distinguir a ambos, añadiremos lo siguiente:

Entenderemos por fraude fiscal, cualquier tipo de conducta o actuación del obligado tributario que conlleve aparejado un perjuicio económico para la HP, con independencia de su cuantía. Dicha conducta, si llegara a producirse, será susceptible de ser perseguida por la Administración, bien por la vía administrativa o por la vía penal, todo ello dependiendo de su cuantía económica. Suponiendo que, la cantidad defraudada, alcance una cifra de 120.000 euros o superior, pasaría a considerarse que ha sido cometido un delito fiscal, y el mismo sería tramitado por la vía penal, pudiendo acarrear penas de privación de libertad. Si la cuantía no alcanzase esta cifra de 120.000 euros, la vía de resolución sería la administrativa, con la imposición de multas o sanciones, teniendo la consideración tal y como hemos apuntado con anterioridad, de fraude fiscal que no delito.

---

<sup>10</sup> El texto ha sido traducido del inglés, y extraído del Informe: “*Handbook on the compilation of statistics on illegal economic activities in national accounts and balance of payments*” (2018). Elaborado por Comisión Europea. EUROSTAT y disponible en el sitio oficial de internet.

Al objeto de identificar de manera correcta la correlación existente, entre el delito fiscal y el blanqueo de capitales, y cómo este puede, alcanzar a ser consecuencia de aquel. De nuevo haremos mención la LPBC/FT en su artículo 1.2 donde queda señalado lo siguiente:

*“...A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito..., con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.”*

En el Marco Comunitario, con la publicación de la *“Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, para trasponer la Directiva de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (BOE núm. 45 de 21 de febrero de 2019).”* Son introducidas modificaciones relacionadas con los delitos contra la HP en la UE, en concreto el artículo 305 en su apartado 3, establece un incremento de los importes defraudados de 50.000 euros a 100.000 euros y de 4.000 euros a 10.000 euros para la determinación de las penas.

Hacemos igualmente mención en este sentido, a las recomendaciones del GAFI, donde podemos encontrar, una referencia implícita y clara en una nota interpretativa, en concreto la número 3 denominada: “delito de lavado de dinero”, en la que establece la relación existente entre **fraude fiscal y blanqueo de capitales**. En el párrafo número dos de esta nota interpretativa, básicamente, viene a señalar lo siguiente:

*“Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a **todos los delitos graves**, con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes. Los delitos determinantes se pueden describir mediante referencia a todos los delitos o a un umbral ligado ya sea a una categoría de delitos graves o a la sanción de privación de libertad aplicable al delito determinante (enfoque de umbral) o a una lista de delitos determinantes o a una combinación de estos enfoques.”* Advertimos tras la lectura de esta recomendación que en el contenido de su expresión: **“todos los delitos graves”**, estarían recogidos los que engloban al delito fiscal.

En este contexto, en un primer escenario, podemos considerar que, el delito fiscal **“podría ser predecesor de un delito por blanqueo de capitales”** en el caso de considerarse que el bien consecuencia de este delito tiene una procedencia u origen delictivo y la cuota

tributaria resultante del fraude, constituye el objeto material. Dando una vuelta y cambiando de escenario, parafraseando a MALLADA FERNÁNDEZ (2012):

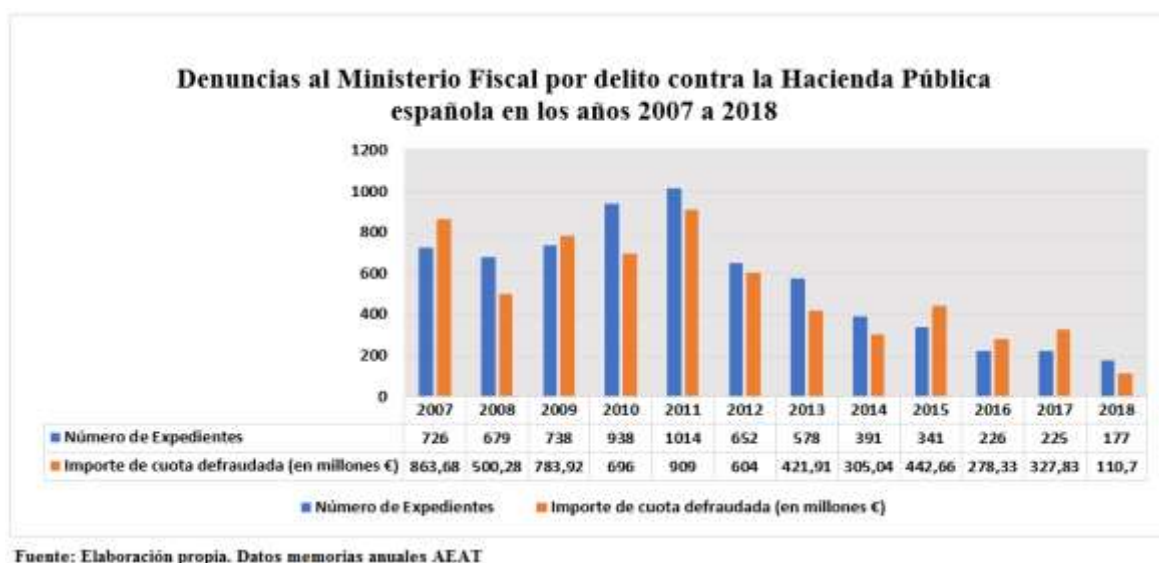
*“...podríamos entender que el fraude fiscal no se catalogaría como predecesor de delito de blanqueo de capital si la cuota tributaria que está siendo defraudada no procede o no es consecuencia de haber cometido previamente una actividad ilícita o delictiva, siempre que entendiéramos que su origen ya se encontraría situado en el patrimonio del que comete el fraude.”*

Añadido a lo anterior, MALLADA FERNÁNDEZ<sup>11</sup>, señala además la siguiente observación:

*“... debemos plantearnos en este punto es si la cuota tributaria defraudada, puede ser o no objeto material del delito de blanqueo de capitales, ya que los bienes que forman parte de la cuota tributaria defraudada ya forman parte del patrimonio del procesado”*

A modo meramente ilustrativo y con la sola intención en el presente trabajo de poder mostrar en cifras económicas, cual fue la evolución que desde el año 2007 al 2018 representó para la HP española el delito fiscal. A continuación, exponemos un gráfico en el que es posible representar, tanto la evolución en el número de denuncias al Ministerio Fiscal, como el importe total de la cuota defraudada para cada uno de los años de referencia.

**Gráfico 1**



<sup>11</sup> MALLADA FERNÁNDEZ, C. “Fiscalidad y blanqueo de capitales.” (2012). Tesis Doctoral (pág.207)



Tras la observación del gráfico anterior, llama especialmente la atención el crecimiento negativo que desde el año 2011 al 2018, experimentaron tanto el número de denuncias al Ministerio Fiscal, pasando de ser 1014 a solo 177 al final del periodo de 2018, suponiendo este descenso un 82,54%. De igual manera, el montante de la cuota defraudada se redujo de forma similar, habiéndose situado esta, en 909 millones de euros en el año 2011, a cerca de 110,7 millones de euros en 2018, lo cual supuso un descenso en la recaudación de la HP, por este concepto, de un 87.82%, en todo este periodo temporal. Obviamente, es posible que exista una explicación más o menos coherente al respecto, como sucede con casi todos los análisis estadísticos.

Como dato histórico, y no como afirmación concluyente por nuestra parte, señalamos, que la Amnistía Fiscal del año 2012, del *“Real Decreto-ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, (BOE núm. 78 de 31 de marzo de 2012)”*, podría haber tenido alguna influencia en este descenso. Ante esta circunstancia, no faltaron opiniones que defendían su conexión con el aumento del fraude fiscal, reduciendo con ello el número de denuncias de manera drástica. Posteriormente la *“Sentencia 73/2017 del Tribunal Constitucional el 8 de junio de 2017, (BOE núm. 168, de 15 de julio de 2017)”*, declaró inconstitucional esta Amnistía Fiscal.

Para finalizar este epígrafe, con la intención de establecer otra relación más, entre fraude fiscal y delito por blanqueo de capitales, dejaremos constancia de una cuestión que nos parece de gran importancia. Nos gustaría hacer referencia, a los plazos de prescripción tanto del fraude fiscal como del delito por blanqueo de capitales. Mientras que el primero tiene una prescripción de **cinco años**, el segundo de ellos prescribirá a los **diez años**. ¿Debemos considerar estos de forma individual en el supuesto caso de que tuvieran una estrecha relación? En este sentido y conforme queda señalado en el CP, artículo 131.1, el fraude fiscal, tiene una prescripción que queda establecida en los cinco años, y los delitos de blanqueo a los diez años. Quedando además lo suficientemente claro en este mismo artículo, en su apartado 4 lo siguiente: *“En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.”* Por tanto, el plazo de prescripción fiscal quedará duplicado en este supuesto.

Parece lógico, no obstante, que en el trabajo que nos ocupa, no entremos en más consideraciones con estas cuestiones, debido principalmente a que, el motivo y la razón

que han llevado a su elaboración son bien distintos. Nos centraremos principalmente, en abordar los problemas derivados de la normativa antiblanqueo, que afectan en la actualidad al entorno del ejercicio profesional del auditor de cuentas.

### **3.3. Repercusión social y económica del blanqueo de capitales**

Tal y como comentábamos al comienzo de este trabajo, el blanqueo de capitales se erige como un acontecimiento de índole internacional, teniendo lugar en un escenario cada vez más global y, en el que las nuevas “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, comúnmente denominadas TIC, se encuentran presentes en casi cualquier región, avanzando a un ritmo veloz y eficaz. Las TIC indudablemente, en nuestra opinión, han provocado que, a menudo el delito financiero se haya expandido con mayor rapidez. Pensemos por ejemplo en las múltiples transacciones financieras que tienen lugar en tan solo unos pocos segundos en todo el mundo, sin necesidad de que el dinero fiduciario intervenga en ningún momento. Las TIC, han constituido desde su aparición, sin duda alguna, una potente herramienta en manos del delincuente.

Los delitos de blanqueo de capitales, y los de financiación del terrorismo acarrearán tras de sí, en numerosas ocasiones serias y negativas consecuencias para las economías de los países donde se producen. Como consecuencia inevitable, estas regiones, ven perjudicado con ello, su bienestar social. La amplitud en la internacionalización y la dimensión global de este fenómeno, quizás fueron los motivos esenciales que llevaron no sólo a los Organismos Internacionales, sino a los propios legisladores a considerar que la normativa debía extenderse mucho más allá del ámbito exclusivamente penal para abarcar también el territorio preventivo con ayuda de nuevas normativas.

En palabras de MIN ZHU<sup>12</sup>, Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional:

*“El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar factores que propician abusos financieros. Las medidas para evitar y combatir el lavado*

---

<sup>12</sup> MIN ZHU (2016) “El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” (2016), pág. 1.

*de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica”*

Es extremadamente complicado hacer un cálculo de la cifra exacta, o ni tan siquiera aproximada del montante económico que podría llegar a suponer en la actualidad, el movimiento de capitales por el delito de blanqueo en numerosos países (ver cuadro en Anexo)<sup>13</sup>. A pesar de todo ello, el “*Fondo Monetario Internacional*” (FMI), elabora una estimación y sitúa la cifra entre el 3% y el 5% del PIB mundial. Si tuviésemos en cuenta estos porcentajes y los extrapolamos al año 2019, donde el PIB nominal en todo el mundo, ascendió a un total de 87.265.226<sup>14</sup> millones de dólares estadounidenses, el movimiento de dinero proveniente de este delito en el mundo osciló en ese periodo a unos 4.363.261 millones de dólares estadounidenses. Una cifra para nada desdeñable, y muy digna de tener en consideración si imaginamos por un momento lo que hubiera podido representar dentro del cauce financiero legal.

Nos gustaría tomar también en consideración el Informe anticorrupción que la Comisión Europea hizo público en el año 2014<sup>15</sup>, donde según sus estimaciones, el montante económico de la corrupción supuso un total de 120.000 millones de euros ese mismo año. Una cifra muy similar al presupuesto anual de toda la Unión Europea (en adelante UE). Obviamente, a la vista de estos datos, parece del todo comprensible que tanto la UE como las más importantes Instituciones gubernamentales de todo el mundo, consoliden esfuerzo y colaboración para intentar desacelerar este fenómeno económico sin precedentes, que supone el blanqueo de capitales.

Dentro de cada economía, el delito de blanqueo de capitales puede llegar a ser el “detonante perfecto” para provocar desequilibrios que, conduzcan a serias dificultades a muchos sectores económicos productivos. Estos desequilibrios, desembocarían sin vacilación en desigualdades y cambios negativos en el Estado del Bienestar. Los delitos en contra de la HP además repercuten muy directamente atacando este bienestar social. Dicho de otro modo: el que defrauda o delinque en contra de la HP, lo está haciendo contra la

---

<sup>13</sup> En el año 2013, la Universidad Utrecht, en Holanda, publicó un interesante estudio denominado Proyecto “ECOLEF” basándose en la repercusión social, económica y legal sobre la efectividad de políticas en “prevención del blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo”.

<sup>14</sup> Fondo Monetario internacional (FMI) Datos estadísticos obtenidos del informe: “*World Economic Outlook Database*” (2019). En inglés. Disponible en el sitio de internet.

<sup>15</sup> EUROPEAN COMMISSION, (2014) “*Report from the commission to the council and the European Parliament.*”

sociedad en su más amplia extensión. Además, los delitos de este tipo contra la HP acarrearán una reducción en los ingresos de las Arcas del Estado, provocando a su vez, que la presión fiscal sostenida por todos los contribuyentes se vaya incrementando, si se busca mantener en condiciones saludables el Estado del Bienestar. Pudiendo afectar muy notablemente y de manera negativa al reparto equilibrado de la riqueza de un país.

A pesar de no ser objeto destacado en este trabajo, no obstante, queremos señalar y hacer referencia expresa a dos importantes artículos del *“Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”*, a este respecto:

**Artículo 63:** *“En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.”*

**Artículo 65:** *“...aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital.”*

Asimismo, GARCÍA-MONCÓ MARTÍNEZ<sup>16</sup>, deja señalado lo siguiente:

*“...Debe quedar claro, por tanto, como presupuesto que cualquier residente en España puede realizar las transacciones internacionales que considere convenientes hacia Estados comunitarios o Estados terceros sin necesidad de autorización previa, sin perjuicio, eso sí, de la obligación de declarar las operaciones, cuando la normativa así lo establezca, a la Dirección General de Transacciones Exteriores y por supuesto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales.”*

No es objeto destacado en este trabajo, hacer un estudio en profundidad, sobre las variables que pueden repercutir negativamente en el sistema socioeconómico de una región, como consecuencia al delito de blanqueo de capitales. Aun así, para concluir el presente apartado, nos gustaría hacer referencia al incremento en el número de sentencias relativas por este delito en años recientes. Para ello, haciendo uso de datos estadísticos publicados y disponibles de los años 2008 a 2017, por el *“Consejo General de Poder*

---

<sup>16</sup> GARCÍA-MONCÓ Martínez, A. En: *“Blanqueo de capitales: régimen general y especial referencia a las obligaciones de los asesores fiscales.”* Gaceta fiscal. 2013. (326) p 47-63

*Judicial*”<sup>17</sup> en su página de internet. Hemos elaborado el gráfico y la tabla de datos que se presentan a continuación y que ilustran la evolución en el número de sentencias relativas a este delito los últimos años.

**Gráfico 2**



Fuente: Elaboración propia. Datos CGJP consultados el 6 de agosto de 2020

<http://www.poderjudicial.es/cgjp/es/Temas/Estadistica-Judicial>

Con la observación del gráfico anterior, en principio, puede apreciarse cómo, desde el inicio del intervalo temporal seleccionado de los años 2008 a 2017, el número total de sentencias relativas al delito de blanqueo de capitales tuvo un marcado crecimiento positivo, excepto en el corto periodo del año 2010 al 2011, donde el crecimiento resultó ser negativo.

**Tabla 1**

Sentencias relativas al delito de blanqueo de dinero en los años 2008 a 2017 en Tribunales españoles			
Año	Condennatorias	Absolutorias	Total
2008	15	11	26
2009	19	9	28
2010	31	15	46
2011	20	16	36
2012	45	30	75
2013	45	19	64
2014	45	20	65
2015	55	24	79
2016	49	28	77
2017	41	23	64
<b>TOTALES</b>	<b>365</b>	<b>195</b>	<b>560</b>

Fuente: Elaboración propia. Datos CGJP consultados el 6 de agosto de 2020

<http://www.poderjudicial.es/cgjp/es/Temas/Estadistica-Judicial>

17 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Datos estadísticos.

Con el interés de facilitar al lector la visualización en la evolución del gráfico precedente, en la tabla anterior se muestran las cifras totales en su conjunto. Nos gustaría destacar, la proporción que se observa en las sentencias condenatorias sobre número total, representando estas, en torno al 65%, mientras que las absolutorias suponen cerca del 35% de todas ellas.

Para finalizar este apartado, queremos referirnos a la “*Sentencia del Tribunal Supremo 501/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 24 de octubre de 2019 (recurso 1568/2018).*” Sentencia condenatoria por blanqueo de capitales, con pena de prisión y que repercute en el ámbito socio económico. En la que destaca la importancia que supone poner la máxima atención en llevar a buen término, una prevención efectiva contra el delito de blanqueo, para disuadir en el intento, que este se convierta en una actividad lucrativa en todo caso. Quedando señalado en su apartado **Fundamentos de Derecho** lo siguiente:

*”... el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el **sistema económico**, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.”*

### **3.4. Organismos internacionales y nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales**

Repetidas veces, en apartados anteriores, hemos dejado constancia, que la práctica del blanqueo de capitales afecta a muchos sistemas financieros y, que no entiende de fronteras si, de lo que se trata es de realizar movimiento de fondos de un lugar a otro. Podemos pensar entonces que, es un delito castigado en muchos países. La imparable globalización y el veloz desarrollo de las TIC, como ya comentamos anteriormente, han hecho posible su rápida expansión, ayudando a que capitales cuyo origen se sitúa en acciones ilícitas, circule con la mayor libertad, salvando fronteras y vigilancias. Son numerosos también los Organismos gubernamentales dedicados a la lucha y la persecución de esta actividad ilegal. Con su magnífica labor, son capaces de contener en buena medida, que este fenómeno se multiplique sin control, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

No intentaremos detallar en este epígrafe cuales son las funciones de los organismos más representativos contra el blanqueo de capitales, tan sólo nos limitaremos a mostrar una

lista de los más importantes y de forma somera, detallaremos una rápida descripción de su trayectoria, al objeto de que el lector tenga una referencia de ellos más o menos resumida. Poniendo especial atención en los Organismos nacionales y los del entorno de la UE.

Si ponemos la vista en los países de América Latina, sin duda el organismo más destacado en este sentido es el denominado, “*Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica*” (GAFILAT)<sup>18</sup>. Otro de los organismos en esta región lo representa “*Grupo de Acción financiera de Sudamérica*” (GAFISUD)<sup>19</sup>, esta organización gubernamental, además de estar formada por países del cono sur americano, también cuenta con la participación de observadores destacados como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, FMI, INTERPOL<sup>20</sup>, Naciones Unidas, y países como Alemania, Estados Unidos o España, entre otros.

Un lugar destacado en la esfera internacional lo ocupa el denominado “*Grupo de Acción Financiera Internacional*” (GAFI), compuesto en la actualidad por un total de 37 miembros, 35 son países a los que se añade la UE más el “*Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico*” (CCEAG), Israel y Arabia Saudita, como observadores, añadiendo, además, un total de nueve grupos regionales como Organismos Asociados. El trabajo del GAFI nos parece de gran importancia, su extraordinaria precisión y relevancia, conduce a servir de modelo singular para los diferentes organismos que, colaboran y luchan en la prevención del blanqueo de capitales en todo el mundo.

Nos resulta especialmente importante señalar, la lista con las “**40 Recomendaciones**”, facilitada por el GAFI, a todos los países, con el objeto de proporcionar medidas efectivas en la prevención de este delito de blanqueo. La LPBC/FT, en su preámbulo y, con respecto a las mismas, añade lo siguiente: “...se limitan a establecer un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente más extensas y detalladas.”

---

<sup>18</sup> “*Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica*” (GAFILAT): “Es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).”

<sup>19</sup> “*Grupo de Acción Financiera de Sudamérica*” (GAFISUD): “Es una organización intergubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a través de la implementación de políticas de cooperación entre los países miembros...”

<sup>20</sup> “*Organización Internacional de Policía Criminal*” (INTERPOL): “Es una organización intergubernamental que cuenta con 194 países miembros, prestando ayuda a la policía de estos países a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro. Facilitando el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes. Ofreciendo apoyo técnico y operativo de diversa índole.”

Este compendio de Recomendaciones del GAFI, está compuesto por una cuidadosa lista de estándares internacionales, que centran su foco de atención tanto en la protección del sector financiero, como en sugerencias encaminadas a proporcionar diferentes pautas a cada país, con la intención de aportar a estos, una orientación que les ayude a combatir el “lavado de capitales” en sus economías.

No nos extenderemos mucho más, alargando la lista de Organismos Internacionales dedicados a la labor de la prevención del blanqueo de capitales, puesto que el número de organizaciones implicadas en ello, unificando esfuerzos, con el objetivo de frenar esta práctica delictiva, sigue por fortuna aumentando sin descanso. Aun así, nos parece importante, nombrar en este apartado, al “Grupo Egmont Unidades de Inteligencia Financiera” (UIF)<sup>21</sup>, formado por 165 organismos de inteligencia financiera, ubicados en un gran número de países. Su labor, del todo admirable, es llevada a cabo de manera consensuada y perfectamente coordinada y se enfoca entre otras muchas cosas en el intercambio de información, en el intento de minimizar el movimiento ilegal de dinero y capitales por todo el mundo. Su trabajo, es apoyado y respaldado por el GAFI, Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, así como del G20<sup>22</sup>, entre otros.

En un **entorno nacional**, es importante hacer constar en este documento, la “Unidad de Inteligencia Financiera”, denominada “Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias” (SEPBLAC). Este organismo nacional, se configura en toda su amplitud, como la autoridad de supervisión en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España.

---

<sup>21</sup> Texto extraído del sitio oficial de internet “Egmont Group” (2020): (Traducción del inglés)  
Existen en la actualidad cuatro tipos de modelos de UIF o de Unidades de Inteligencia Financiera:  
“El Modelo Judicial: se establece dentro del poder judicial del gobierno en el que las agencias de investigación de un país reciben revelaciones de actividad financiera sospechosa de su sector financiero, de manera que los poderes judiciales pueden entrar en juego, por ejemplo, incautar fondos, congelar cuentas, realizar interrogatorios, detención de personas, realización de registros, etc.”  
“El Modelo de Aplicación de la Ley: implementa medidas contra el lavado de dinero junto con los sistemas de aplicación de la ley ya existentes, apoyando los esfuerzos de múltiples autoridades policiales o judiciales con autoridad jurisdiccional concurrente o en ocasiones competidora para investigar el lavado de dinero.”  
“El Modelo Administrativo: es una autoridad administrativa centralizada, independiente, que recibe y procesa información del sector financiero y transmite divulgaciones a las autoridades judiciales o policiales para su procesamiento. Funciona como un “amortiguador” entre las comunidades financiera y policial.”  
“El modelo híbrido: sirve como un intermediario de divulgación y un vínculo con las autoridades judiciales y policiales. Combina elementos de al menos dos de los modelos FIU”

<sup>22</sup> El G-20, grupo de los 20: “está formado por 19 países y la Unión Europea, entre los que los países que figuran los que forman el G8. Se estableció en 1999, con el fin de tratar temas relevantes de la economía mundial. es un foro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de veinte economías importantes, que no cuenta con Sede ni personal permanente. El G-20 está compuesto por las principales economías industrializadas y emergentes del mundo. La suma de la población de sus países representa dos tercios de la población mundial y el 85% del PIB.” En DatosMacro (2020)



Las funciones básicas que desempeña este organismo son las que pasamos a exponer a continuación:<sup>23</sup>

- *“Presta auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes.”*
- *“Eleva a los citados órganos las actuaciones de las que se deriven indicios racionales de delito o, en su caso, infracción administrativa.”*
- *“Recibe de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las comunicaciones por indicio y sistemáticas a las que se refieren los artículos 18 y 20 de la citada ley.”*
- *“Analiza la información recibida y le da el cauce que en cada caso proceda.”*
- *“Ejecuta las órdenes y sigue las orientaciones dictadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) o por su Comité Permanente, y le eleva los informes que solicite.”*
- *“Supervisa e inspecciona el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de conformidad con lo previsto en su artículo 47.”*
- *“Efectúa recomendaciones a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, orientadas a la mejora de las medidas de control interno.”*
- *“Propone al Comité Permanente de la CPBCIM la formulación de requerimientos a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.”*
- *“Informa, con las excepciones que se determinan reglamentariamente, en los procedimientos de creación de entidades financieras sobre la adecuación de las medidas de control interno previstas en su programa de actividades.”*
- *“Informa, con las excepciones que se determinan reglamentariamente, en los procedimientos de evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero.”*
- *“El resto de funciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, o que le atribuyen las disposiciones legales vigentes.”*

---

<sup>23</sup> Información recogida en el sitio de internet oficial del SEPBLAC: “Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias” (2020)

## **4. EL AUDITOR DE CUENTAS ANTE EL BLANQUEO DE CAPITAL**

Con el inicio de este epígrafe, daremos comienzo, al segundo de los dos grandes apartados en los que se divide este trabajo y, que comentábamos en la introducción. En él, se concentrará el núcleo central que resumirá a nuestro juicio, cuál está siendo, la problemática actual a la que se enfrenta el Censor Jurado de Cuentas en la práctica de su profesión, desde en su postura como sujeto obligado en la normativa antiblanqueo. Pondremos el foco de atención en intentar dar respuestas, a las cuestiones más relevantes como resultado a esta problemática.

A continuación, procederemos en primer lugar a identificar el impacto que la normativa antiblanqueo ha podido provocar en el ejercicio profesional del Censor Jurado, e inmediatamente después, expondremos algunas propuestas de solución a los problemas derivados de la misma, y que repercuten a estos profesionales. Todo ello con la confianza de poder aportar de alguna forma, soluciones de valor al respecto.

### **4.1. El impacto de la normativa “antiblanqueo” en el ejercicio profesional del auditor de cuentas**

Nos gustaría volver de nuevo a retomar una idea que expusimos en la introducción de este trabajo, y que nos parece importante cuando se analiza la problemática que, trasciende al Censor Jurado en el desempeño de su ejercicio profesional, bajo la influencia de la LPBC/FT. Estamos haciendo mención, a la actitud, que el auditor de cuentas debe adoptar en el desempeño de su trabajo, bajo la normativa como sujeto obligado, ante la que debería comportarse con un espíritu de compromiso social pleno. En la introducción, habíamos comentado, lo importante que era para el correcto cumplimiento de esta normativa, que el Censor Jurado, adoptase una postura colaborativa y enfocada a desarrollar su actividad desde una perspectiva del “bienestar común” y no con la idea de, llevar a cabo una serie de obligaciones bajo la certeza de, tener que soportar duras sanciones en caso de incumplir la normativa.

Pongamos el ejemplo de cualquier contribuyente que no cumple con sus obligaciones tributarias, actuando en este caso en detrimento de la HP. Por definición, este contribuyente quizás en un principio no sea consciente que, al actuar de esta manera,

también se está perjudicando a sí mismo de alguna forma, teniendo presente el carácter social de esta Institución en su más amplia extensión. Con esto queremos decir que, el Censor Jurado, en el desempeño de su profesión, y en cumplimiento riguroso de sus obligaciones, también está contribuyendo al bienestar social plenamente. Es importante entonces, que el Censor Jurado sepa conocer muy bien cuál es la verdadera repercusión negativa que le afecta y, que le viene dada por sus obligaciones conforme a la LPBC/FT.

Es probable que los Censores Jurados, contables y asesores fiscales junto a los abogados, sean algunos de los sujetos obligados en la normativa y detallados en el artículo 2.1 de la LPBC/FT, que, debido a las características de su actividad profesional, estén expuestos a un volumen más elevado de información procedente de sus clientes, y en consecuencia a una mayor probabilidad de, poder detectar presuntas irregularidades por parte de los mismos, relacionadas con actividades ilícitas susceptibles de blanqueo.

En concreto, casi la totalidad de los trabajos de auditoría elaborados por los auditores, tienen como fin y objetivo, la obtención de la certeza y la razonabilidad suficientes para, afirmar que los estados financieros de los negocios de sus clientes quedan, libres en su conjunto de errores materiales que le lleven a concluir que, pudiera existir un posible fraude o descuido en estos. Aunque no se exige la absoluta certeza y plena seguridad sobre ello, puesto que obviamente resultaría del todo imposible tenerla y, teniendo en cuenta que el auditor no revisa el cien por cien de las operaciones del cliente, ya que únicamente, se limita en todo caso a realizar muestreos estadísticos y, en base a ellos procede a la elaboración del informe de su trabajo de auditoría.

A pesar de ello, los informes de auditoría expresarán un dictamen a cerca de, si los estados financieros representan o se ajustan a la imagen fiel del negocio de acuerdo con el marco legal de la información financiera en cuestión. Todo ello, como hemos comentado, requiere en muchos casos, la revisión y el análisis de un gran volumen de documentación financiera, a la que el cliente debe dar acceso, en cualquier caso, al auditor. Esto hace que el auditor de cuentas, se convierta automáticamente en conocedor de múltiples transacciones económicas, haciendo que la ejecución de su trabajo pueda resultar a menudo muy compleja y extremadamente laboriosa.

Uno de los principales impactos que la normativa antiblanqueo provoca en el ejercicio profesional del auditor de cuentas, es atender rigurosamente todas las numerosas obligaciones que la normativa le impone. Ante tal circunstancia, aunque el Censor Jurado,

deba llevar a cabo esta tarea enfocándola desde la óptica del bien social, el esmerado y cuidado cumplimiento de todas ellas, no deja de ser en determinadas ocasiones, una variable que puede llegar a poner trabas al desarrollo de su actividad.

## **4.2. Obligaciones y responsabilidades del auditor de cuentas ante la normativa “antiblanqueo”**

En concordancia a la distribución de los capítulos y disposiciones contenidos en la LPBC/FT y, ajustándonos a las obligaciones que la misma impone a los distintos sujetos obligados enumerados en el artículo 2.1. Bajo nuestro criterio, consideramos que las mismas, pueden quedar agrupadas en tres apartados diferenciados<sup>24</sup>. El que ocupará el primer lugar, hará referencia a las obligaciones en cuanto a la diligencia debida, el segundo estará dedicado, a las obligaciones de información y finalmente, un tercero que, se ocupará de detallar las obligaciones sobre las medidas de control interno<sup>25</sup>. En este orden de cosas, podemos llegar a verificar, que el auditor de cuentas se encuentra a merced de la normativa antiblanqueo, donde no solo se enfrenta a una serie de preceptos legales que, le trasladan una batería de deberes a los que debe dar cumplimiento en tiempo y forma, sino que además en caso de no hacerlo con riguroso esmero, podría incurrir en errores que le acarrearían graves consecuencias tanto económicas como penales.

El primer conjunto de obligaciones señaladas en la LPBC/FT a las que queda sometido el Censor Jurado de Cuentas, está formado por aquellas que determinan el cumplimiento de la llamada “diligencia debida.” Estas obligaciones, establecen un importante mandato inicial al sujeto obligado, que consiste en la correcta identificación de la persona o

---

<sup>24</sup> Información contenida en el sitio de internet del SEPBLAC (2020): “*Los sujetos obligados están sometidos a las disposiciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y a las dispuestas por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, y por resto de normas que la desarrollen.*”

*“Sin perjuicio del resto de las obligaciones establecidas por la normativa vigente, y con las excepciones reglamentariamente establecidas, los sujetos obligados están, con carácter general, sometidos a obligaciones en materia de diligencia debida, información y medidas de control interno.”*

<sup>25</sup> En el Anexo, se adjunta: “*En el marco de la guía sobre recomendaciones de control interno de PBC/FT emitida por el Sepblac y publicada en su web, se presenta un modelo de autoevaluación del sistema de PBC/FT, que, como en el caso del documento de recomendaciones de control interno, los sujetos obligados tendrán que adaptar a la realidad de su negocio y al riesgo del mismo ante el BC/FT*” (2020)

personas que, pretendan establecer negocios con él. Quedando todo lo anterior recogido en la LPBC/FT, Capítulo II, artículo 3.1, de la siguiente manera:

*“Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones. En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas. Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios.”*

Esta identificación formal, debe hacerse de manera obligatoria y siempre con anterioridad al establecimiento de una relación contractual o de negocios con el cliente, la cual se llevará a cabo, a través de documento fehaciente. Siendo necesario identificar tanto al otorgante como a su representante, tal y como señala el “*Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, (BOE núm. 110 de 6 de mayo)*”, y por el que se aprueba el Reglamento de la LPBC/FT, en su artículo 6.2:

*“En los casos de representación legal o voluntaria, la identidad del representante y de la persona o entidad representada, será comprobada documentalmente. A estos efectos, deberá obtenerse copia del documento fehaciente a que se refiere el apartado precedente correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad representada, así como el documento público acreditativo de los poderes conferidos...”*

En el cumplimiento de esta obligación, el auditor de cuentas debe ser especialmente cauteloso, y no solo debe limitarse a cumplir con el proceso minucioso que conlleva la identificación formal y correcta de la persona en cuestión, sino que, obviamente, también debe hacer uso de su intuición, experiencia y pericia profesional. Tanto en este primer contacto, donde tiene lugar la identificación formal del cliente, como en el resto del proceso del trabajo de auditoría, que culminará con la emisión del correspondiente informe. El auditor de cuentas deberá adoptar una actitud completamente escéptica en todo momento.

Obviamente, puede suceder que en algunas ocasiones, resulta complicado para el sujeto obligado por la normativa, en este caso el auditor de cuentas, certificar y corroborar con total seguridad y certeza, que el documento fehaciente que se le está mostrando, y con

el que procederá a la identificación formal de la persona, es absolutamente legal. Es interesante también mencionar el artículo 21.1 del Reglamento de la LPBC/FT, aprobado por “*Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (BOE núm. 110 de 6 de mayo)*”, en donde queda recogido lo siguiente:

*“Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presente...La identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de otros procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales, siempre que tales procedimientos hayan sido previamente autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...”*

El legislador, en nuestra opinión, tras la aprobación de la LPBC/FT, tiene la intención de involucrar y trasladar a ciertos sujetos o personas, entre ellos a los Censores Jurados, obligaciones y, tareas concretas, con la advertencia de un severo sistema de sanciones, en caso de incumplimiento. Dejando además bajo su responsabilidad, tareas que en realidad tendría que realizar la propia Administración. Dicho de otro modo; la Administración está delegando un trabajo que, en realidad, en nuestra opinión, debería ejecutar ella misma. En este sentido, solicita la colaboración de una serie de sujetos, poniéndoles en advertencia, en este caso al auditor de cuentas que, de no llevar a cabo un mecanismo orientado a la colaboración plena con la Administración o si esta colaboración fuera nula o inexistente, o bien no se realizara con la suficiente diligencia debida, ello podría acarrearle graves consecuencias.

Por otro lado, al sujeto obligado en concreto, se le presume conocedor de toda la normativa antiblanqueo en vigor, y se espera de él que cumpla con ella de manera absolutamente rigurosa. Atendiendo al caso particular del Censor Jurado, conforme a las características de su profesión, y sin llegar generalmente, al nivel profesional y académico que pudiera tener un jurista en la interpretación de las normas, es posible que disponga de unos conocimientos aceptables y necesarios, aunque con ciertas limitaciones en esta materia. En cambio, no nos atrevemos a decir lo mismo de otros sujetos obligados incluidos en la lista de la LPBC/FT, como puede ser el caso de un joyero o el responsable de una administración de loterías, puesto que es muy probable que, estos sujetos

necesitarán recurrir a los servicios de un profesional experto en la materia para que les asesore en consecuencia. Con el consiguiente coste económico que ello supondría.

El auditor de cuentas en el desempeño de su profesión, cuando se ve afectado por la imposición de obligaciones que le son impuestas por la LPBC/FT, tiene especial importancia en este sentido el que lleve a cabo con el mayor esmero una serie de medidas basadas en una diligencia debida rigurosa. Las precauciones que deberá tomar para intentar detectar cualquier sospecha de blanqueo de capitales, serán llevadas a cabo con especial cautela. En el desempeño de esta tarea, además es importante que siempre y en todo momento el sujeto obligado, esté dispuesto a colaborar con cualquier organismo oficial o con las autoridades competentes en la materia. A todo lo anterior, el Censor Jurado, deberá añadir que, en caso de ser requerido por alguno de estos organismos o autoridad competente, ha de estar en condiciones de, saber y poder demostrar ante los mismos que hizo todo lo que estaba a su alcance para intentar detectar una posible operación de blanqueo de capitales. En este sentido el artículo 7 de la LPBC/FT, lo deja recogido de la siguiente manera:

*“...los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.”*

De este modo, a colación de lo anteriormente comentado, quisiéramos hacer un inciso que consideramos importante, el cual se deriva de la entrada en vigor del “*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (BOE núm. 214 del 4 de septiembre)*”, y que viene a introducir en una de sus novedades una modificación en cuanto a la conservación de documentación. Así la LPBC/FT en su artículo 25.1:

*“Los sujetos obligados conservarán durante un período **mínimo de diez años** la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley...para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente competente...desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación...”*

El “*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (BOE núm. 214 del 4 de septiembre de 2018)*” en su Título II, **modifica dicho artículo de la siguiente manera:**

*“Los sujetos obligados conservarán durante un período **de diez años** la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos **cinco años** desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal”*

*“En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente competente...”*

Por lo tanto, y en base a esta novedad en la normativa antiblanqueo, hay que entender lo que exponemos a continuación:

- Continúa la obligación de conservar toda la documentación a este respecto, por un periodo de diez años, a contar estos desde la fecha en que se ponga fin a la relación de negocios con el cliente.
- Habrá por otro lado, que tener en cuenta: que transcurridos **cinco años** desde la finalización de esta relación de negocios con el cliente, todos los documentos conservados, relativos a las operaciones de negocio mantenidas entre ambos, únicamente serán accesibles a sus órganos de control interno o a requerimiento y solicitud de autoridad legal competente que los solicite.

En este orden de cosas, el auditor de cuentas, además, debe prestar mucha atención a la gestión del riesgo implícito en el posible deterioro de su reputación en caso de ser sancionado, por incumplimiento de la normativa. La confianza que los clientes depositan en la calidad de su trabajo y profesionalidad, son pilares fundamentales sobre los que se sostiene gran parte de su negocio. La pérdida de esa confianza, sin duda estaría acompañada del oscurecimiento de su imagen y sello profesional. En base a todo ello, la



actitud del Censor Jurado no solo debe ser analítica, sino que además debe ser completamente escéptica. No mantener el escepticismo en su labor profesional puede en algunas ocasiones conducirlo por la senda del error y en consecuencia dejarle expuesto al incumplimiento normativo.

El salvaguardar y proteger su reputación en este sentido, puede incluso acarrear para el auditor de cuentas un despliegue de medios técnicos y materiales, traducidos en un aumento de costes para su negocio, que de no estar sujeto tan rigurosamente a las obligaciones de la normativa antiblanqueo, es probable que no tuviera que soportar. Pensemos por ejemplo en el coste implícito en materia de formación en el que, las sociedades de auditoría deben incurrir para formar adecuadamente a todos los empleados, un coste traducido en horas de trabajo efectivo. Aunque, por otro lado, cabe señalar que han sido numerosas las sociedades de auditoría, o incluso diversos despachos jurídicos y centros de formación especializados que, con motivo de esta circunstancia, han desarrollado líneas paralelas de negocio al respecto, ofreciendo en la actualidad formación dirigida y orientada al conocimiento de la normativa antiblanqueo en diversos sectores, donde también se encuentran otros sujetos obligados de esta normativa.

De tal forma, BLANCO CORDERO<sup>26</sup>, con anterioridad a la publicación de la LPBC/FT, en el año 2009, publica un interesante documento que trata sobre la prevención del blanqueo de capitales, donde aborda la problemática que gira en torno a los costes en la prevención. En él, hace referencia a cómo los mismos afectan a los sujetos que, deben vigilar la prevención del delito de blanqueo. Una de las observaciones interesantes de este jurista gira en torno a una posible “externalidad positiva” derivada precisamente de estos costes, y nos señalaba lo siguiente:

*“Es cierto que el cumplimiento de tales obligaciones puede dificultar la maximización de beneficios, que es lo que persigue toda empresa. Pero también se puede utilizar como forma de publicidad positiva, pues permite eludir la mala imagen que se puede derivar de posibles incumplimientos, y compensar de alguna manera los costes de sus inversiones”.*

---

<sup>26</sup>BLANCO CORDERO, Isidoro. "Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica." Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (2009). Pág. 117-138

Es necesario pensar que el Censor Jurado, de la misma manera que el resto de los obligados por la normativa antiblanqueo, tiene que ejercer dos posturas bien distintas, la primera de ellas como “vigilante” atento de las operativas de su cliente, pero a la vez también se encuentra “vigilado” por la normativa. Todo esto, irremediablemente **le genera una serie de costes** cuando a la par, está luchando para maximizar el resultado económico en sus negocios. El trabajo de BLANCO CORDERO (2009), en concreto está enfocado en los costes que el cumplimiento de la normativa acarrea a las entidades financieras, pero perfectamente podríamos extrapolar la misma teoría a las sociedades de auditoría, quienes, en su caso, y con frecuencia, se podrían encontrar en la necesidad de incrementar sus costes, ya fuera en gastos de formación, como hemos apuntado con anterioridad, o en un aumento del gasto para la implantación de sistemas de información adecuados. Sin olvidar tampoco, los costes de oportunidad, ya que, para cualquier profesional, ocupan un lugar importante a pesar de que estos no impliquen un movimiento monetario. Resulta de suma importancia, por tanto, tenerlos en consideración cuando se trata de evaluar el futuro económico de un negocio, puesto que, en caso de incurrir excesivamente en ellos, tendrían un reflejo significativo en las cuentas de explotación de este tipo de sociedades.

En lo referente a la formación, tanto el auditor de cuentas como cualquier obligado por la LPBC/FT, deberá aprobar un **plan anual de formación**, conforme a lo establecido en el Reglamento de la LPBC/FT (artículo 39). Se tendrá en cuenta, no obstante, que conforme a la LPBC/FT, el auditor de cuentas quedará sujeto a control interno a través de un examen por parte de experto externo, como consecuencia de un informe en el que serán descritas, todas las medidas tomadas al respecto, susceptible de ser modificado o rectificado tras su valoración. En este sentido, el artículo 28 de la LPBC/FT, señala lo siguiente:

*“...que el mismo tendrá que ser elaborado por quienes reúnan condiciones académicas y experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño de esta función.... Los sujetos obligados no podrán encomendar la práctica del examen externo a personas que les hayan prestado o presten cualquier otra clase de servicios retribuidos durante los tres años anteriores a la emisión del informe.”*

El auditor de cuentas quedará sujeto a esta obligación, siempre y cuando su negocio ocupe no más de diez trabajadores, o su balance anual no supere los dos millones de euros,

artículo 31 del “*Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, (BOE núm. 110 de 6 de mayo de 2014).*”

Un documento publicado en el año 2018 por Accountancy Europe<sup>27</sup>, nos recuerda una situación que, en la práctica profesional del auditor de cuentas, no es extraño que suceda en determinadas circunstancias y, que es oportuno comentar en este trabajo:

*“... el auditor de cuentas, no debe olvidar que detectar una irregularidad como consecuencia de un intento de fraude, es mucho más complicado que detectar una irregularidad que pueda deberse a un error contable o similar, teniendo presente que el presunto delincuente que intenta blanquear capitales con una conducta ilícita, será mucho más cuidadoso en ocultar sus artimañas que si el error lo comete una persona debido a una imprudencia involuntaria”*<sup>28</sup>.

Siempre y, en todo momento, el Censor Jurado debe tener presente que es únicamente él, el responsable de haber tomado o no las medidas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento tanto de las obligaciones impuestas por la normativa, como del desempeño de su trabajo.

Llegados a este punto, nos planteamos las siguientes cuestiones al respecto: ¿Qué sucedería si el auditor de cuentas, de una manera inconsciente, no pudo dar cumplimiento a estas obligaciones en la forma adecuada? Es decir, imaginemos que no fue consciente de una determinada situación de irregularidad y, no identificó una operación susceptible de blanqueo de capitales, entonces es sancionado, ¿cómo podría defenderse de ello y librarse de la sanción? Suponiendo por supuesto, que al final se demuestre que tuvo lugar el blanqueo de capital en una operación. La normativa, es muy concluyente con respecto a este asunto y, determina que, necesariamente el sujeto obligado debe poner todos los medios necesarios para intentar prevenir el blanqueo, o lo que es lo mismo; para intentar detectar una operación de blanqueo en la práctica de su profesión. Si finalmente se diera el supuesto caso que hemos planteado, obviamente el primer paso que el auditor de cuentas

---

<sup>27</sup> “**Accountancy Europe** agrupa a 50 organizaciones profesionales de 37 países que representan a casi 1.000.000 de profesionales de la contabilidad, auditores y asesores. Hacen que los números trabajen para la gente. Accountancy Europe traduce su experiencia diaria procedente de toda Europa para informar al debate político europeo y global.”. (2020)

<sup>28</sup> **ICJCE**: “El papel del auditor en la lucha contra la delincuencia financiera” (2018). “Esta publicación es la traducción de un documento publicado originalmente por Accountancy Europe en abril de 2017 bajo el título Auditor’s role in fighting financial crime. Standing up to fraud, corruption and money laundering. La traducción ha sido preparada bajo la responsabilidad única del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.”

debería de considerar para proceder a su defensa, sería intentar demostrar que, a pesar de no haber podido detectar el indicio de blanqueo, puso todos los medios de los que disponía en ese momento para que este no pasara desapercibido.

Estas y otras cuestiones, podrían dar lugar a un trabajo mucho más extenso que el que nos ocupa. Un trabajo que estuviera basado en un análisis jurídico y no tanto en la problemática que como consecuencia a la normativa antiblanqueo repercute en el ejercicio profesional del auditor de cuentas. Por tanto, entendemos que es lógico, intentar no dar respuesta a estos interrogantes en esta ocasión.

Resulta llamativa, no obstante, la postura que se supone debe adoptar el auditor de cuentas ante la LPBC/FT conforme al mandato del legislador. No sólo el auditor de cuentas, sino que también estarán incluidos en este mandato el total de sujetos obligados que conforman la lista. Una postura que le obliga a comportarse como un auténtico “policía o inspector.” En concreto son varios los artículos de la LPBC/FT que lo dejan entrever de forma implícita, así el artículo 5 obliga al auditor a obtener información suficiente sobre sus negocios, señalando lo siguiente:

*“Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito de índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.”*

El artículo 6 de la LPBC/FT, a efectuar un seguimiento continuo de sus negocios:

*“Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los documentos, datos e información de que se disponga estén actualizados.”*

En este orden de cosas, la citada LPBC/FT, no sólo obliga a obtener información o, a efectuar un seguimiento continuo conforme a los artículos anteriores, sino que en su artículo 17, señala, además, que el sujeto obligado, prestará atención a pautas de comportamiento no habituales y que puedan hacer sospechar ni tan siquiera indicios de fraude o simulación de este, tal y como reza a continuación:

*"Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude."*

No es objeto ni intención en este trabajo, transcribir o comentar todo el articulado que conforma la LPBC/FT, y más concretamente, aquellos apartados donde de una u otra forma quedan expuestas cada una de las obligaciones a las que está sometido el auditor de cuentas y con ello a su obligado cumplimiento. Si procediéramos de ese modo, con toda seguridad, nos estaríamos limitando a no profundizar en la temática que motivó desde el principio, la elaboración de este trabajo.

En base a lo contenido en este epígrafe, así como una vez expuesto todo lo anterior, consideramos relevante recordar, la existencia de una serie de obligaciones que sería interesante comentar en este trabajo, sin entrar a profundizar demasiado, ya que consideramos que, para el lector, puede resultar de provecho hacer un repaso por todas ellas.

En este sentido y, volviendo al artículo 17 de la LPBC/FT, es importante que el auditor de cuentas en el desarrollo de sus trabajos de auditoría, tenga siempre en cuenta el caso concreto y particular de cada operación de negocios, valorando estas de forma aislada desde su criterio profesional, es decir: independientemente del contexto o inclusive de la cuantía económica de cada una de ellas, porque todas las operaciones pueden o no, ser susceptibles de esconder tras de sí un indicio de delito. Además, siempre deberán en estas circunstancias dejar constancia por escrito de sus observaciones al respecto, tanto de las operaciones realizadas, como de cualquier posible comportamiento que pueda dar indicios a sospechar la comisión de delito de fraude. Este examen lo deberá cumplimentar el auditor de cuentas de la forma más exhaustiva y detallada posible, incluyendo en él a todas las personas que formen parte en la operación que le haya inducido a sospechas.

En caso de que, el auditor detecte indicios evidentes de fraude o delito en estos hallazgos, deberá irremisiblemente ponerlo en conocimiento del SEPBLAC a la mayor

brevedad posible, con el objeto de que seguidamente, este Organismo de Inteligencia Financiera valore la comunicación recibida y si así lo estima oportuno y conveniente, remita el informe correspondiente al Cuerpo Nacional de Policía o a la Fiscalía del Estado.

Siguiendo a MIR FERNÁNDEZ<sup>29</sup>: “...resulta interesante al considerar al auditor de cuentas sujeto obligado, a la par que se considera sujeto activo en la elaboración del informe sobre experto externo...debemos recordar la importancia de que el auditor cuente con un sistema de control interno adecuado para el funcionamiento de su negocio, estableciendo políticas y procedimientos acordes al tamaño de su entidad, pero especialmente a la normativa que le resulta aplicable.”

No hay que olvidar nunca que, aunque el auditor de cuentas en una empresa y el experto externo no puedan ser la misma persona, cuando llegue el momento de la elaboración de los informes, tanto el informe de auditoría emitido por el auditor de cuentas, como el elaborado por el experto externo con motivo del cumplimiento de la normativa en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es importante que se mantenga una disposición colaboradora entre ambos auditores en todo momento. Tampoco es necesario que ambos informes deban coincidir en fechas, no obstante, los dos, deben de ser elaborados anualmente.

Así las cosas, un Censor Jurado, podría obviamente, convertirse en experto externo conforme a los requerimientos de la LPBC/FT. Para ello deberá comunicar al SEPBLAC, la decisión de querer ejercer esta función. No existen requisitos específicos para ser experto externo, salvo conocimientos necesarios para llevar a cabo la prevención en esta materia. Será necesario, no obstante disponer de suficiente experiencia para desempeñar legalmente esta función. Podrá, además contar con la intervención de otros expertos en cualquier actividad que considere oportuna para el cumplimiento de su objetivo. Con motivo de sus actuaciones, deberá remitir cada seis meses al SEPBLAC, relación de todos los sujetos obligados a los que haya sometido a alguna valoración por su parte. En caso de no haber examinado a ningún sujeto obligado, no será necesario, remitir este informe al SEPBLAC.

---

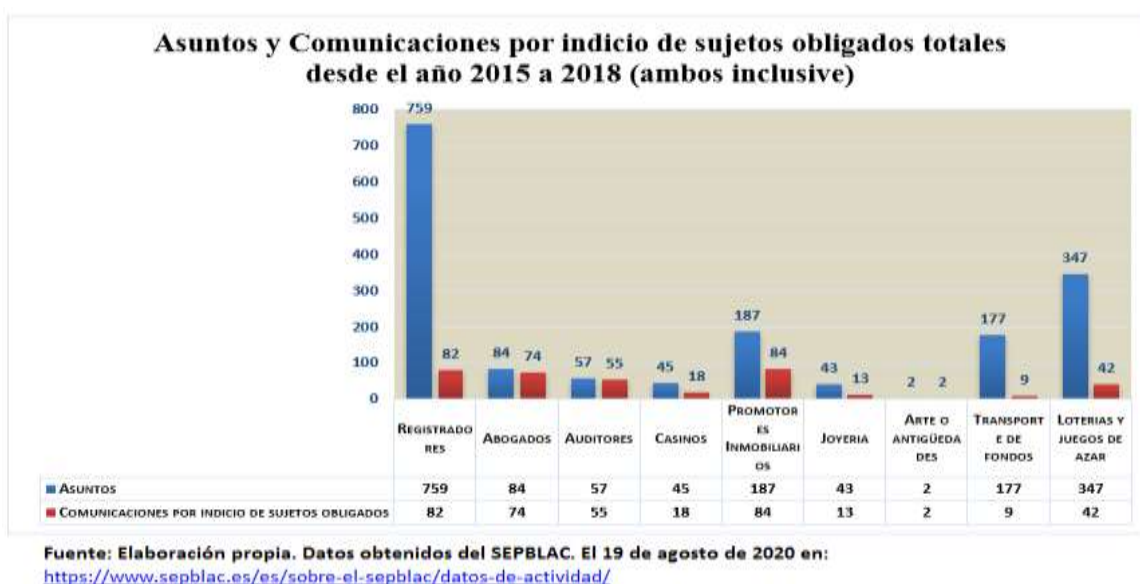
<sup>29</sup>MIR FERNÁNDEZ, C. (2018): “Manual de Auditoría y Control Interno”, Capítulo 37, pág. 1167

No olvidemos que la “*Directiva de la Unión Europea*”, en referencia al blanqueo de capitales, exige al auditor de cuentas, seguir rigurosamente un proceso de información constante a las autoridades, instándole a informar, de todo indicio de sospecha que tenga sobre cualquier operativa susceptible de delito.

En base al artículo 49 de la LPBC/FT, donde queda señalado expresamente en el apartado b) que está permitida: “La *publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada, de manera que las personas o sujetos implicados no puedan ser identificados ni siquiera indirectamente.*” Datos estos que, están en poder de la “Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.”

En este contexto, a continuación, mostraremos un gráfico que hemos elaborado, con datos publicados por el SEPBLAC para un periodo temporal de cuatro años, y que abarca del año 2015 al año 2018, ambos inclusive. En él se puede ver, la evolución en el número tanto de asuntos despachados por el SEPBLAC, como de comunicaciones por indicio de blanqueo transferidas al organismo en estos años, por parte de varios de los sujetos obligados en la LPBC/FT.

**Gráfico 3**



Llama especialmente la atención en el gráfico anterior, el elevado número de asuntos procedentes por parte de los Registradores, así como de los procedentes de las

administraciones de lotería y juegos de azar. En cuanto a los auditores de cuentas, sujetos obligados sobre los que se enfoca el presente trabajo, cabe destacar que, a pesar de no ser el dato muy elevado con respecto a los anteriores sujetos, los asuntos despachados y las comunicaciones por indicio de blanqueo de capitales presentan cifras muy similares.

Mostraremos a continuación, al objeto de poder visualizar con mayor nitidez los datos del gráfico anterior, los mismos resultados, pero en esta ocasión en forma de tabla numérica con el desglose de cada uno de los años.

**Tabla 2**

Unidad de Inteligencia Financiera Comunicaciones por indicio de sujetos obligados no financieros										
Sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril	2015		2016		2017		2018		Totales 2015 a 2018	
	Asuntos	Número de sujetos obligados	Asuntos	Número de sujetos obligados	Asuntos	Número de sujetos obligados	Asuntos	Número de sujetos obligados	Asuntos	Número de sujetos obligados
Registradores	124	82	271	-	158	-	206	-	759	82
Abogados	24	19	19	17	24	21	17	17	84	74
Auditores	18	17	18	17	9	9	12	12	57	55
Casinos	5	3	5	2	18	6	17	7	45	18
Promotores inmobiliarios	45	18	47	20	44	24	51	22	187	84
Joyería	2	2	32	5	6	3	3	3	43	13
Arte o antigüedades	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
Transporte de fondos	51	3	46	3	49	2	31	1	177	9
Loterías y juegos de azar	91	10	67	10	98	11	91	11	347	42

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del SEPBLAC. El 19 de agosto de 2020 en: <https://www.sepblac.es/es/sobre-el-sepblac/datos-de-actividad/>

En consonancia con todo lo anteriormente mencionado en este epígrafe, no podemos obviar una circunstancia que tiene una incidencia y una repercusión sumamente importantes, ya que en numerosas ocasiones ha supuesto para el auditor de cuentas, una sucesión de trabas y dificultades en el desempeño de su labor profesional. Nos gustaría aquí hacer referencia, al deber del secreto profesional. Para ello, en primer lugar, mencionaremos el, “*Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, («Gaceta de Madrid» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882)” que en su artículo 262, señala lo siguiente:

“Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.”



A tenor del mencionado artículo, resulta obvio que no sólo el auditor de cuentas estará obligado a denunciar cualquier sospecha de delito que detecte, sino que también lo estará cualquier otra persona que se encuentre ante una situación similar o parecida. Asimismo, el ICAC, también confirma lo anterior (Consulta núm. 1 BOICAC 69/marzo 2007):

*“...el deber de secreto de los auditores de cuentas no se encuentra vulnerado por el hecho de cumplir las obligaciones de comunicación anteriormente mencionadas y previstas legalmente. En ese mismo sentido, y con referencia al antes citado artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha manifestado la OCDE en relación con el concreto delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros recogido en el artículo 445 del Código Penal.”*

No obstante, en la LPBC/FT, nos encontramos con un artículo que expresamente hace referencia al deber de secreto, en concreto el artículo 49, hace constar lo siguiente:

*“Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o para cualquiera de sus órganos y hayan tenido conocimiento de sus actuaciones o de datos de carácter reservado están obligadas a mantener el debido secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades previstas por las leyes. Estas personas no podrán publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.”*

En este orden de cosas, no podemos obviar una realidad a la que se ha dado mayor visibilidad, como consecuencia de la actual normativa antiblanqueo con mayor rigor y que afecta rigurosamente al estricto secreto profesional, que debe guardar el auditor de cuentas en el desempeño de su profesión. Así, FLORES Y GONZÁLEZ<sup>30</sup>, hacen la siguiente observación en uno de sus trabajos publicados en 2017:

*“Esta normativa ha supuesto importantes restricciones al tráfico mercantil y a la libertad económica de los ciudadanos. Los mayores esfuerzos se han realizado desde el ámbito de la prevención, imponiendo obligaciones en algunos casos excesivas a sectores*

---

<sup>30</sup> MARTÍN, A. R. F., & Botija, F. G. (2017). “La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE.” RUE: Revista universitaria europea, (26), 91-120.

*profesionales que de modo más directo pueden verse afectados por estas actividades. El secreto profesional de los abogados se ha visto en peligro, si bien la normativa ha tratado de salvar este extremo con la exención de cumplir con las obligaciones de información a los abogados dedicados a la defensa en juicio de los intereses de su cliente. También ha sufrido limitaciones el secreto bancario.”*

Asimismo, el artículo 18 de la LPBC/FT, hace constar que: *“Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”*. Del mismo modo la normativa, deja muy claro que el auditor de cuentas, *“al igual que el resto de los obligados”*, no puede *“en ningún caso”* informar al presunto delincuente que, ha detectado indicios de blanqueo de capitales en sus intenciones y obviamente, tampoco podrá informarle que, ha procedido a dar comunicación de sus sospechas a las autoridades competentes.

El SEPBLAC, una vez que reciba una comunicación de sospecha por parte de algún sujeto obligado, valorará la información recibida y si lo estima conveniente, emitirá un informe que tendrá como destino el Juzgado correspondiente. Este informe, estará firmado exclusivamente por el SEPBLAC, y siempre garantizará la confidencialidad del sujeto obligado que le facilitó la información. Podríamos afirmar que una de las funcionalidades de este organismo de Inteligencia Financiera, es que, actúa como filtro o colchón. El delincuente “blanqueador”, no tendrá conocimiento de quién informó a las autoridades competentes, que su actitud levantaba sospechas delictivas. El Juez, no llamará en estos pleitos, a testificar al sujeto obligado, en este caso al auditor de cuentas.

Por su parte el SEPBLAC, una vez recibida la comunicación por parte de algún sujeto, de una operación susceptible de blanqueo, estará obligado en cualquier caso en primer lugar, a comprobar y verificar que el sujeto obligado que le comunicó la sospecha cumple rigurosamente con la normativa existente. En segundo lugar, procederá al análisis de la denuncia, extrayendo de ella sus propias conclusiones. Todo ello con el objeto de

determinar finalmente si el sujeto obligado realiza correcta y eficientemente sus obligaciones. En este sentido, el auditor de cuentas no sólo tiene el deber de cumplir con la totalidad de normas, sino también la obligación de demostrar que puso todos los medios a su alcance y necesarios para ello. Por ejemplo, podría darse el supuesto caso, que el SEPBLAC, lleve a cabo una inspección en una entidad donde, no se haya producido ningún blanqueo de capitales, y obviamente no será sancionada por ello, pero podrá ser sancionada por incumplir las normas.

La normativa para la prevención del blanqueo de capitales, en poco más de 40 años, ha experimentado un cambio muy significativo. Ya lo comentábamos en la introducción de este trabajo. Si tenemos que señalar una fecha con especial significado, sin duda está sería diciembre de 1988, donde tuvo lugar la Declaración de Basilea: *“sobre la prevención de la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal”*, seguida del, *“Convenio de Viena de las Naciones Unidas (UN): Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancia sicotrópicas. (BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1990)”*. *“El Convenio del Consejo de Europa de Estrasburgo: Instrumento de ratificación por parte de España del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, del 8 de noviembre de 1990. (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1998)”*, las 40 recomendaciones del GAFI, LPBC/FT y su Reglamento. Esta importante evolución de la legislación en las últimas décadas, junto con la internacionalización y globalización han avivado de alguna manera, el intenso movimiento de capitales por todo el mundo de manera vertiginosa.

El delincuente, presunto “blanqueador de capitales”, ya sea persona física o jurídica, en vista del endurecimiento de la normativa antiblanqueo, ha agudizado perspicazmente todo su ingenio, ideando infinitas formas y maneras, a través de las cuales, introducir en el cauce legal del sistema financiero, capitales con origen en, actividades ilícitas, como sabemos, con la intención de darles apariencia legítima. Esto ha desembocado irremisiblemente, en que el Censor Jurado, sujeto obligado por la LPBC/FT, y principal protagonista del trabajo que nos ocupa, se vea perjudicado en gran medida.

El perfil del delincuente “blanqueador”, oculto tras las ideas que disfrazan sus pretensiones ilegales, y que aumentan con el endurecimiento de las penas y las sanciones que, castigan este delito de blanqueo, ha tenido como consecuencia, además, que la labor

del Censor Jurado se vea entorpecida por múltiples trabas. El comportamiento del “blanqueador” se torna menos colaborador con el auditor de cuentas, porque su temor a que sus “artimañas” sean descubiertas, aumenta en la misma proporción que la agudeza del auditor de cuentas. Al auditor se le complica la tarea de verificar, si los estados financieros que le muestran reflejan o proyectan, la fidelidad de la imagen de la empresa en caso de tropezar con el que pretende delinquir.

Los informes de auditoría, a raíz del endurecimiento de la normativa antiblanqueo, se han vuelto cada vez más complejos de elaborar. El presunto “delincuente”, tiene la certeza de que, un despiste por su parte sería capaz de activar al máximo las alertas del auditor de cuentas y este a su vez, haciendo uso de su profesionalidad y en cumplimiento de la normativa como sujeto obligado que es, pondría en conocimiento de los organismos competentes, cada una de las irregularidades que haya podido detectar en su trabajo.

Por tanto, en este sentido, opinamos que la normativa antiblanqueo, tiene una importante repercusión en el ejercicio profesional del auditor de cuentas, puesto que de alguna manera considerando lo anterior, dificulta el trabajo de estos expertos. No debemos olvidar, una situación que se repite muy frecuentemente; el auditor de cuentas, para realizar su labor dispone de un tiempo limitado de ejecución, y en este sentido, debe respetar los plazos en las entregas de sus trabajos. Al mismo tiempo debe estar sorteando y subsanando las posibles trabas que le pueda tender el “presunto blanqueador.” Obviamente, el cliente que nada tiene que ocultar y nada tiene que esconder a un auditor de cuentas, se mostrará sin lugar a duda, más colaborador y facilitará en consecuencia el trabajo del profesional.

#### **4.3. Identificación de problemas que repercuten en la profesión del auditor de cuentas como consecuencia de la normativa “antiblanqueo”**

En el epígrafe anterior, expusimos las principales obligaciones y responsabilidades del auditor de cuentas como sujeto obligado por la normativa antiblanqueo, acompañando a cada una de ellas, de diferentes comentarios y observaciones con el objeto de ilustrar de la mejor manera posible, aunque de forma somera, el lugar que ocupan en la normativa.

No es nuestra intención en este trabajo, ser capaces de identificar todos y cada uno de los problemas que han podido surgir, o que han sido detectados en la actualidad como consecuencia a la implantación de la normativa antiblanqueo, y que afectan al ejercicio profesional del auditor de cuentas. Esta sería una labor, no solo difícil de llevar a buen término, amén de pretenciosa, sino que además podría dar lugar en alguna ocasión a malas interpretaciones por parte de algunos auditores. No obviando nunca que, siempre existirán profesionales en el sector de la auditoría, que puedan o sean capaces de sortear y salvar los problemas en el ejercicio de esta profesión, bajo el halo de la normativa antiblanqueo, mejor que otros. Dicho de otro modo: existirán siempre profesionales que, detecten un problema en el ejercicio de su profesión, allí donde otros ni tan siquiera se lo hubieran planteado nunca.

En este orden de cosas y, dando valor a esta premisa, daremos un enfoque general al trasfondo que ocupa este epígrafe y nos centraremos en los problemas que, bajo nuestra óptica investigadora, hemos considerado más relevantes. En un apartado posterior, aportaremos a este conjunto de problemas, algunas propuestas de solución. Todo ello con el único fin y con la mejor de las intenciones, de arrojar luz a ideas que ayuden de algún modo en la prevención del blanqueo de capitales.

Volveremos de nuevo a retomar algunos conceptos e ideas que fueron expuestos en apartados anteriores, aunque en esta ocasión intentando abordar su trasfondo desde una óptica completamente analítica, es decir, interpretando su contenido, en relación con el posible efecto negativo que pudieran trasladar los mismos, al desempeño del ejercicio profesional del auditor de cuentas, que como ya sabemos, se encuentra tipificado como sujeto obligado por la LPBC/FT. Es por ello por lo que, consideramos del todo necesario, insistir en recordar que la normativa antiblanqueo, y en concreto la LPBC/FT, destila un característico carácter preventivo, es decir, está enfocada, a la prevención de un comportamiento ilícito del delincuente, pero también obligando a varias personas al cumplimiento de una serie de obligaciones para detectar estas conductas ilícitas por parte de aquellas. Todo ello bajo la atenta vigilancia de un duro régimen sancionador, en caso de incumplimiento por parte del sujeto obligado.

Defenderemos nuevamente la afirmación que hicimos en las primeras páginas de este trabajo, que no es otra que subrayar la utilidad que tiene, el hecho por el cual, el auditor de cuentas contemple esta normativa, en su posición de sujeto obligado, actuando de una

manera plenamente consciente a nivel social. Una postura que empatee con un compromiso solidario y sostenible para el bienestar económico en general y no tanto desde la obligación impuesta e ineludible de una normativa sancionadora. No obstante, entendemos que la circunstancia de asumir por imposición legal, una serie de obligaciones no deja muy probablemente de lado, el planteamiento de una cuestión relevante, que ya expusimos en páginas anteriores, y que, por considerarla importante, volvemos a ella nuevamente: ¿deberían ser asumidos en su totalidad los deberes impuestos por la normativa antiblanqueo a los sujetos obligados, únicamente por la Administración? Dicho de otro modo; ¿está delegando la Administración en estos sujetos obligados, un trabajo que en realidad debería hacer ella misma?

No albergamos la más mínima duda, cuando afirmamos que el legislador puso todo su esmero en la elaboración de la normativa antiblanqueo. Estamos convencidos, además, que no seleccionó a los sujetos obligados enumerados en la LPBC/FT de una forma caprichosa. Probablemente valoró la situación de todos los sujetos que incluyó finalmente en la lista, analizando las características de cada uno de ellos con detalle. Con seguridad, debió tener siempre presente el aporte individual que cada sujeto podría sumar a la prevención de este comportamiento delictivo, desde su posición en los sectores económicos en los que desempeñan sus labores profesionales.

De igual modo, entendemos que tuvo que valorar con sutileza, si estos sujetos obligados, podrían ser más eficientes que la propia Administración para realizar esta labor tan delicada. Pero obviamente tampoco podemos dejar de pensar que, con este comportamiento, la Administración, trasladó de alguna manera una serie de costes que, de no haber delegado estas obligaciones, tendría que haber asumido casi por completo ella misma. Pensemos por ejemplo en los gastos administrativos, como pueden ser el coste de personal especializado o inclusive el coste en medios técnicos derivados muchos de ellos en la adaptación de sistemas informáticos.

En este contexto, el Censor Jurado puede llegar a pensar que, de alguna u otra forma, la Administración pudiera haber actuado injustamente con él, al nombrarle sujeto obligado, imponiéndole duras sanciones en caso de no cumplir con los mandatos de la normativa. Un papel que debe de desempeñar sin opción a renuncia y que además le acarreará casi con total seguridad, una serie de costes económicos, en algunos casos importantes.

Volveremos a citar a BLANCO CORDERO<sup>31</sup>, cuando en el año 2009, concluye uno de sus trabajos señalando lo siguiente: *“Después de más de 20 años de prevención del blanqueo de capitales, los resultados son decepcionantes a nivel nacional y europeo. Los sujetos obligados, especialmente las entidades financieras, están soportando unos costes importantes por su colaboración activa en la prevención del blanqueo. Los sistemas preventivos han influido en sus clientes, que tienen que pagar por las medidas de prevención... Y los gastos de los sujetos obligados se van a incrementar en el futuro...”*

Ha pasado algo más de una década, desde la publicación en 2009, de este documento. En nuestra opinión, la problemática de esta situación en la actualidad todavía persiste, y lejos de haberse minimizado desde entonces, ha seguido sin duda la estela que pronosticó BLANCO CORDERO (2009) en su informe. Los costes económicos en los que pudieran incurrir los sujetos obligados con respecto a la normativa antiblanqueo, no han dejado de aumentar desde entonces. Estos costes han terminado por convertirse en la actualidad en un motivo de preocupación para muchos profesionales Censores Jurados.

Sabemos que son incontables las formas y maneras que puede idear el presunto delincuente para blanquear dinero: a través del narcotráfico, compraventa de bienes inmuebles u objetos de valor y antigüedades, compra de bienes o instrumentos financieros, contrabando de efectivo, bitcoin, etc.... Sabemos además que el presunto “delincuente blanqueador”, aprovechará todas las oportunidades que tenga a su alcance para llegar a su objetivo, es decir, querer dar apariencia legal a un dinero proveniente de una actividad ilícita, introduciéndolo en el sistema financiero sin levantar sospechas y, con ello estar cometiendo un delito, por el que busca no ser descubierto. Si en el caso del auditor de cuentas, el presunto blanqueador, se encuentra dentro del perímetro de su actividad profesional y forma parte de su cartera de clientes, éste hará todo lo posible para despistarlo, poniendo especial interés en que sus intenciones no salgan a la luz, evitando con ello que este, de la voz de alarma a los organismos competentes.

Obviamente, como en todas las profesiones y en todos los sectores, existen unos profesionales más sagaces y perspicaces que otros, partiendo de la premisa de que todos son buenos en lo que hacen, lo cual, y como no podía ser de otra manera, también sucede

---

<sup>31</sup> BLANCO CORDERO, Isidoro. "Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica." Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (23) p. 134 (2009).

en el sector de los Censores Jurados. Esta teoría siguiendo la misma lógica, la podríamos trasladar al propio delincuente, ya que siempre los habrá más o menos torpes en sus intenciones, y más o menos astutos.

Así las cosas, imaginemos también que se puede dar la coincidencia de una persona jurídica, que requiera los servicios profesionales de un auditor de cuentas, al estar sujeta por ley a que sus estados financieros sean sometidos a auditoría de cuentas, y que encierre no demasiadas buenas intenciones, porque pretenda pasar desapercibida una operación susceptible de blanqueo de capitales, siendo además los administradores de esta sociedad, sumamente astutos. Y que casualmente la sociedad de auditoría que contratan para este servicio, por el motivo que sea, se encuentra en ese momento con una fuerte saturación de trabajo que, provoca un despiste involuntario en los auditores, que les hace imposible detectar la operación ilícita y susceptible de blanqueo de capitales de su cliente. En consecuencia, no informará de ello al SEPBLAC, y el cliente malicioso verá culminada su pretensión. ¿Qué puede suceder entonces?, podemos pensar en varias consecuencias, pero a dónde queremos llegar con este ejemplo es a lo siguiente: el cliente malicioso, tomará buena nota de lo sucedido y podría ser que intentase repetir la misma operación con el mismo auditor en otra ocasión, o lo que es mucho peor, podría entre su círculo social más cerrado de “delincuentes blanqueadores”, hacer correr las voces del suceso y aumentar con ello la popularidad del auditor que “no fue capaz” de detectar la operación ilegal.

En definitiva, puede tener lugar la problemática de una distribución desigual en el mercado profesional del sector de la auditoría. La competitividad entre las sociedades de auditoría aumenta, conforme aumentan las obligaciones impuestas para el auditor como sujeto obligado. Las personas que tengan la intención de llevar a cabo operaciones susceptibles de blanqueo de capitales buscarán primero los servicios del auditor de cuentas que le recomendó su amigo “blanqueador de dinero”, ya que le habrán creado una fama de ser “más permisivo.” Estaríamos frente a una pérdida de competitividad de los profesionales en el sector de la auditoría de cuentas, que no se encontraron nunca en una situación similar.

El auditor de cuentas, ante la tesitura en la que se encuentra, catalogado como sujeto obligado por la normativa antiblanqueo. Podría en algunos casos provocarle una amarga sensación pensar que no es del todo justo encontrarse bajo a la presión que conlleva estar sometido a, una serie de obligaciones que le son impuestas por ley, y cuyo incumplimiento



le puede acarrear duras sanciones, cuando lo que está haciendo, en definitiva, es desplegar toda una batería de herramientas propias, y esfuerzos poniéndolos a disposición del bien común de la sociedad. No se debería olvidar que el trabajo del Censor Jurado radica en verificar, los estados financieros de las empresas de sus clientes y emitir tras esta verificación, una opinión sobre si estos ofrecen la imagen fiel de sus negocios y no en la persecución de un delito como el blanqueo de capitales.

Al mismo tiempo, habrá que considerar, el aumento del coste de oportunidad, ya comentado anteriormente y, que para los auditores de cuentas ha supuesto su inclusión como sujeto obligado en la normativa antiblanqueo. Los procedimientos que estos profesionales deben realizar antes de aceptar o no, un trabajo de auditoría, se han vuelto sin duda más complejos y laboriosos, con una mayor inversión de tiempo. La primera impresión que tenga el auditor de cuentas de su posible futuro cliente, debería quedar libre de toda sospecha o indicio en cuanto a que este pudiera estar vinculado a alguna operación de blanqueo de capitales, amén de la prohibición expresa en la LPBC/FT, de poder dar comienzo a ninguna clase de negocio con un sospechoso delincuente.

En base a lo anterior, la incidencia que para el auditor de cuentas representa su calificación como sujeto obligado en la normativa antiblanqueo y, la problemática que le afecta en torno a esta circunstancia, queda muy resumida en los párrafos anteriores, que, sin ser excesivamente extensa, tiene una importante repercusión en el desempeño del ejercicio de su profesión.

En el siguiente apartado, intentaremos aportar algunas ideas y posibles soluciones a los problemas detectados y expuestos en este trabajo. Con el ánimo de que estas, puedan ayudar a paliar o al menos minimizar de alguna forma, los inconvenientes o trabas, que en el cumplimiento de sus obligaciones ante la actual normativa antiblanqueo, el Censor Jurado pueda encontrar.

#### **4.4. Propuesta de soluciones a los problemas encontrados**

Hasta aquí, a lo largo de varios epígrafes, hemos intentado abordar y sintetizar en qué consiste la operativa del blanqueo de capitales, así como identificar alguno de los problemas más significativos, a los que se enfrenta el Censor Jurado en el desempeño de su ejercicio como profesional en el sector de la auditoría. A continuación, y en base a todo lo

anterior, nos parece necesario y absolutamente fundamental, aportar a través del análisis de este trabajo, una serie de propuestas de solución a los problemas encontrados al respecto.

Tal y como se ha querido dejar constancia a lo largo de su desarrollo, en este trabajo, no se ha pretendido, en definitiva, hacer un resumen de la normativa antiblanqueo, a la que el lector puede siempre acudir para mayor comprensión y detalle del tema que nos ocupa y en cualquier ocasión, consultando directamente la publicación de Leyes y Reglamentos Oficiales.

No obstante, en lo referente al régimen de sanciones e infracciones, muy resumidamente, remitimos al lector de nuevo, a la LPBC/FT, en concreto a los artículos 50 a 62, donde quedan detalladas las sanciones de carácter Administrativo, y nuevamente al Código Penal, artículos 301 a 304, que mencionábamos al principio en la introducción de este documento. En estos artículos, se recogen implícitamente las sanciones por incumplimiento de la normativa, y que son calificadas como leves, graves o muy graves pudiendo llegar a alcanzar cuantías importantes. Muy resumidamente las exponemos a continuación:

**Sanciones según:** *“Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE núm. 103 de 29 de abril)”:*

- Leves: *“desde amonestación privada a 60.000 €”*
- Graves: *“desde 60.000 € hasta la mayor de: 10% del volumen de negocios anual del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50% o el triple de los beneficios de la infracción si estos pueden cuantificarse o el importe de 5.000.000 €”*
- Muy graves: *“desde 150.000€ hasta la mayor de: 10% del volumen de negocios anual del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación, el quíntuplo de los beneficios de la infracción, si estos pueden cuantificarse, en caso contrario 10.000.000 € “*

**Sanciones según:** *“Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 152 de 23 de junio)”:*

- Multa por cuotas: desde 300 € a 9.000.000 €
- Multa proporcional (superior a 9.000.000 €)

- Posibilidad de suspensión o cierre de la actividad.

En este orden de cosas, entendemos que las posibles propuestas de soluciones o sugerencias, que podríamos aportar a los problemas encontrados, y que afectan de forma directa al auditor de cuentas en el desarrollo de su ejercicio profesional, como sujeto obligado de la normativa antiblanqueo, pueden agruparse en un reducido número. Cada una de ellas, muy en consonancia con las numerosas cuestiones e inquietudes que de seguro le habrán surgido a casi la totalidad de profesionales que forman parte del sector de la auditoría. Podemos afirmar que, los problemas detectados como consecuencia a la elaboración de nuestro análisis, no han dado lugar al descubrimiento de una nueva problemática hasta ahora desconocida en el sector de la auditoría que, afecte al colectivo de los profesionales Censores de Cuentas.

**Las soluciones a los problemas que proponemos en este epígrafe tienen cabida en tres apartados diferenciados:** Fundamentalmente, estas propuestas de solución están orientadas a la implementación de ayudas por parte de la Administración, que puedan sufragar los costes en los que el Censor Jurado, siendo sujeto obligado de la normativa, debe incurrir, como resultado del desempeño de sus funciones, así como a facilitar su labor profesional.

En más de una ocasión, a lo largo del análisis de este trabajo, hemos contemplado la persona del auditor de cuentas como el experto que debe tomar plena conciencia social en el desempeño de su labor, enfocando el objeto de su trabajo, no solo a sus propias metas ya sean profesionales o personales, sino también a la orientación del ejercicio de su profesión bajo la disposición del bien común. Todo ello, sin limitarse a centrar el foco de atención en la obligación de una normativa impuesta, con la única finalidad de no ser sancionado por incumplimiento legal. En consecuencia, a continuación, pasamos a exponer las mencionadas propuestas de solución a los problemas encontrados en base a nuestro análisis:

**A) Nuestra primera propuesta de solución,** está enfocada a proveer al auditor de cuentas de mayores incentivos fiscales por parte de la HP, que le motiven en el desempeño de su trabajo. No queremos decir con ello que el auditor de cuentas, con esta medida fuera a desempeñar mejor y más eficazmente su labor, si se diera esta circunstancia. Tampoco pretendemos afirmar que la introducción de más incentivos fiscales asociados a su profesión, le hicieran ser más responsable en el desempeño de sus

obligaciones como sujeto obligado con respecto a la LPBC/FT, pero sí tomamos en consideración la posibilidad de que, en caso de contemplarse estos incentivos fiscales en el Sistema Tributario español, estos podrían ser de gran ayuda de cara a una mayor recaudación tributaria y, a la probable extrapolación de sus resultados, en forma de externalidades positivas, a otros campos diferentes al exclusivamente tributario. Lo que nos lleva al planteamiento de las siguientes cuestiones: ¿deben ser, fiscalmente incentivados los Censores Jurados, personas físicas o personas jurídicas, para un mejor desempeño de su ejercicio profesional, en el cumplimiento de sus deberes como sujeto obligado de la normativa antiblanqueo? o bien ¿Introducirían los incentivos fiscales en el sector de la auditoría las herramientas suficientes -o, avanzando un paso más, las necesarias- para acotar por completo o al menos minimizar lo máximo posible, el cerco al delincuente, “blanqueador de capitales”?

Sabemos que los incentivos fiscales, constituyen una importante herramienta para el estímulo de determinadas conductas en algunos sectores económicos. Aunque, en principio, puedan suponer una menor recaudación tributaria para el Erario Público, su objetivo es encauzar con ellos recursos que repercutan en beneficios al conjunto de la economía. Sabemos también que, el Estado en ocasiones, determina qué tipo de actividades económicas son estratégicas para el bienestar de la economía, ya sea porque constituyen un motor productivo interesante, o porque promover su desarrollo se convierta en un acicate fecundo para la economía.

En este sentido, proponer o sugerir la implantación de un eficaz conjunto de incentivos fiscales en el sector de la auditoría, pensamos que podría servir en cierto modo para minimizar, parte de la problemática que afecta a este sector y que ha podido surgir a raíz de las nuevas obligaciones impuestas por la normativa antiblanqueo.

Obviamente, la implantación de incentivos fiscales para los auditores de cuentas, en el sector de la auditoría, con la intención de paliar la repercusión negativa que, la normativa antiblanqueo ha podido llegar a tener en el ejercicio profesional de estos sujetos obligados, podría en según qué casos, orientarse hacia una discriminación al resto de sujetos obligados por la LPBC/FT. No es nuestra intención hacer esta propuesta con la sola mención a los Censores Jurados de Cuentas como únicos sujetos obligados en la normativa. Es más que probable que el legislador llegase a la conclusión de, incentivar fiscalmente al conjunto de sujetos obligados, ya fueran personas físicas o jurídicas, por la

normativa antiblanqueo, de una u otra forma, en función de sus circunstancias profesionales, y con ello pensar que fuera lo más idóneo. Confiamos en que así fuera.

Si tuviésemos que proponer alguno de los incentivos fiscales que, en nuestra opinión podrían ser implementados, nos encontraríamos sin duda muy lejos de poder ofrecer una solución altamente eficaz al respecto, puesto que, obviamente esta es una labor que únicamente compete a quienes diseñan y aprueban las Leyes Tributarias. Aun así, estamos convencidos que, el legislador, en un intento de mejorar la efectividad de la normativa antiblanqueo, muy probablemente encontraría sin duda, opciones viables y provechosas en este sentido.

Consideramos que la implementación de nuevos incentivos fiscales puede ser extremadamente laboriosa y complicada, y posiblemente más, si los mismos van destinados a los Censores Jurados en el ejercicio de su profesión. Esta tarea se complicaría todavía más, si lo que se pretende es, que estos estuvieran en consonancia con la prevención del blanqueo de capitales. Unos incentivos que, podrían estar relacionados con el Impuesto sobre Sociedades en el caso de las personas jurídica si tenemos en cuenta a las sociedades de auditoría, o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de profesionales autónomos.

Pongamos un ejemplo hipotético: imaginemos una sociedad de auditoría que, por segundo año, en un periodo temporal determinado, fue capaz de detectar entre su cartera de clientes alguna operativa por parte de estos, susceptible de blanqueo de capitales y que esta operativa fue comunicada convenientemente al SEPBLAC. Este Organismo Oficial por su parte, al recibir la denuncia del sujeto obligado, en nuestro ejemplo, el Censor Jurado, emite un informe, cuya resolución por parte de la Justicia finaliza con una sentencia condenatoria por blanqueo de capitales hacia el cliente denunciado. Por todo este proceso, finalmente el sujeto obligado, es incentivado fiscalmente de alguna determinada manera. Como resultado final, la sociedad en su conjunto se vería beneficiada y el auditor de cuentas también lo estaría. ¿Podríamos afirmar que de hacerse realidad la hipótesis de nuestro ejemplo, el auditor de cuentas desempeñaría mejor su trabajo al saberse incentivado? Obviamente, no estamos en condiciones, ni debemos emitir una opinión al respecto de esta cuestión, en nuestro análisis.

**B) La segunda de las propuestas de solución** que, quisiéramos esbozar con relación al análisis que nos ocupa, la hemos enfocado fundamentalmente al despliegue de

medios tanto técnicos como materiales que el sector de la auditoría, y más en concreto el profesional auditor de cuentas, bien como persona física o como sociedad de auditoría en su forma jurídica, debe dispersar y poner en funcionamiento para que le sirvan de soporte y de ayuda en el desempeño de sus obligaciones. Volviendo de nuevo al articulado de la LPBC/FT, la misma en su artículo 29, contempla una cuestión referente a la formación continua de los empleados, quedando la misma recogida como sigue a continuación:

*” Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.”*

La LPBC/FT, es muy clara cuando menciona las obligaciones que los Censores Jurados, así como el resto de los obligados por la normativa, tienen que cumplir en relación con los planes de formación de sus empleados. Todo ello, con la finalidad de que, en nuestro caso, las personas que ejerzan funciones de auditoría, obtengan una adecuada formación en esta materia de prevención del delito de blanqueo, al objeto de poder ser capaces de detectar, en el desarrollo de sus tareas cualquier indicio sospechoso de una operativa de delito financiero. Además, la LPBC/FT, tipifica en su artículo 52 como “*infracción muy grave*” el incumplimiento de esta obligación recogida en el mencionado artículo 29. Por tanto, en función a la normativa en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es obligatoria la confección de un plan anual de formación, acreditado convenientemente.

Siguiendo con esta segunda propuesta, consideramos que podría resultar sumamente interesante, por parte de la Administración, valorar la posibilidad de aprobar la concesión de subvenciones de carácter económico que, ayudasen a soportar el coste que supone para la actividad de la auditoría, esta formación, en su más amplia extensión.

Existen en la actualidad numerosos cursos accesibles a todo tipo de personas, en los que es impartida formación enfocada a adquirir y mejorar un conocimiento de la normativa antiblanqueo. Algunos de ellos, son impartidos por Organismos Oficiales, como por ejemplo el “*Servicio Público de Empleo Estatal*” (SEPE) o la “*Fundación Estatal para la Formación y el Empleo*” (FUNDAE). Subvencionados estos en su totalidad.

Estos cursos ofrecen una formación no exenta de calidad, pero lamentablemente, en muchos casos, adolecen de la carencia para profundizar, en un tema tan delicado como es la prevención del blanqueo de capitales para profesionales expertos. Por todo ello, nuestra propuesta pone el foco en una subvención que cubra el coste de formación en esta materia, de una forma mucho más especializada y centrada absolutamente en el sector de la auditoría. Una subvención que sea capaz de dar cobertura, no sólo al coste de formación propiamente dicho, sino que también incluya el coste de oportunidad que, para los negocios, supone no poder disponer de sus empleados en el desempeño de los trabajos de auditoría, el tiempo necesario que dura esta formación obligatoria.

**C) La tercera y última de las propuestas**, es mucho más simple que las anteriores y a nuestro parecer más sencilla de implementar. No supondría un incentivo fiscal o ahorro monetario para el auditor de cuentas, pero sí, un ahorro de costes en su negocio. Esta propuesta consiste básicamente en intentar, de alguna forma, poner solución a los inconvenientes que pudieran surgir con respecto a la identificación fehaciente del cliente.

El “*Consejo de la Unión Europea*” en su página de internet, da acceso a una lista de terroristas de la UE, que el “*Diario Oficial de la Unión Europea*” publica, donde aparecen detalladas las personas, grupos y entidades a los que se aplica la “congelación de activos financieros”. Igualmente detalla una serie de medidas aumentadas de cooperación tanto policial como del ámbito judicial. Todas ellas referidas a personas que **no pertenecen** a la UE. Aunque también de manera similar, publica una segunda lista, con personas, grupos y entidades a los que se aplica medidas reforzadas de cooperación policial y judicial. Todas ellas referidas a personas que **si pertenecen** a la UE. Ambas listas son llamadas comúnmente “listas de congelación”, a ellas puede acudir a modo de consulta el sujeto obligado por la normativa antiblanqueo, con el fin de cotejar los datos que aparecen en ellas con los que obran en su poder y, que proceden de las personas que pretenden hacer negocios con él.

Obviamente, existen otras bases de datos oficiales y confidenciales, cuya gestión responsable en el caso de España está en manos del SEPBLAC. Nos estamos refiriendo al “*Fichero de Titularidades Financieras*” (FTF). Este fichero contiene aproximadamente datos relacionados con 130 millones de cuentas y depósitos bancarios y, está destinado a utilizarse como herramienta de ayuda en la prevención del blanqueo de capitales. De manera muy distinta, a lo que sucede con las “listas de congelación” que mencionábamos anteriormente, este FTF, no es de acceso público por cuestiones lógicas. A este fichero tendrán acceso los jueces de instrucción, así como el Ministerio Fiscal, y previa autorización de este, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También tendrá acceso a este fichero la AEAT.

Es importante recordar que, el artículo 32 de la LPBC/FT, señala que, para estos ficheros FTF, gestionados por el SEPBLAC, no resulta de aplicación la “*Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999)*”.

Con todo lo anterior, queremos exponer, en esta tercera propuesta de posibles soluciones a los problemas que el auditor de cuentas, puede llegar a encontrar en el desempeño de su ejercicio profesional frente al blanqueo de capitales. La implementación de un sistema de base de datos informatizada que, sin querer tener la pretensión de alcanzar las características del fichero FTF, pero tampoco la simplicidad de las “listas de congelación” publicadas por la UE, se localice en un punto donde únicamente, determinados sujetos obligados en la normativa, que se enfrenten a la necesidad de manejar un gran volumen de información por parte de sus clientes, para el ejercicio profesional, puedan recurrir a la misma, al objeto de cotejar datos de identificación, ayudando con ello a detectar más eficazmente operativas susceptibles de blanqueo de capitales. Nos estamos refiriendo, a los Censores Jurados, aunque consideramos que otros sujetos obligados en la normativa, también deberían tener acceso preferente a esta hipotética base de datos, dadas las características de su ejercicio profesional, como pueden ser los notarios o los abogados.

En el anexo de este trabajo, hemos incluido las mencionadas y más recientes “listas de congelación” publicadas por la UE, al objeto de que el lector pueda, tras su revisión, comprobar qué tipo de información aparece reflejada en ellas. Asimismo, también está contenidas en este anexo, información por parte del SEPBLAC, relativa a los procedimientos que el sujeto obligado por la normativa, ha de llevar a cabo para la correcta



identificación del cliente con el cual pretende hacer negocios, en el supuesto de que dicho procedimiento tuviera que llevarse a cabo de forma no presencial. De igual modo, está contenida la llamada “Ficha de autoevaluación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, elaborada por el SEPBLAC, la cual deberá servir de guía al sujeto obligado para el cumplimiento de los estándares establecidos con respecto a la LPBC/FT.

## 5. CONCLUSIONES

La “*Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE núm. 103, de 29 de abril)*”, junto a la figura del Censor Jurado de Cuentas, han establecido el hilo conductor, a través del cual, hemos tenido ocasión de llevar a cabo el análisis y la elaboración del presente trabajo. Nos ha acompañado en este trayecto, el resto de la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo más actualizada, pudiendo con todo ello, llegar finalmente a las conclusiones que exponemos a continuación:

1. Sabemos con certeza que la actividad del blanqueo de capitales constituye una amenaza manifiesta para el conjunto de la estabilidad económica mundial y que, lejos de parar o tan siquiera minimizarse, se sitúa cada año con mayor virulencia en el epicentro de los sistemas financieros de muchas economías. No obstante, los legisladores de un gran número de países ante semejante fenómeno están trabajando enérgicamente implementando Leyes y Reglamentos que ayuden en el intento de paliar las negativas consecuencias económicas y sociales de este fenómeno, muchos de ellos, actuando de manera consensuada. La normativa en esta materia es amplia y está siendo actualizada cada relativamente poco tiempo, lo cual demuestra el interés que los gobiernos ponen en combatir las graves consecuencias derivadas de la delincuencia financiera.
2. La introducción de novedades en materia de política fiscal, enfocadas al sector de la auditoría, podría de alguna manera ayudar a salvar con éxito alguno de los obstáculos que, los Censores Jurados de Cuentas, ante el cumplimiento de la normativa antiblanqueo, se ven obligados a sortear irremediabilmente. **Los incentivos fiscales**, son considerados por una amplia mayoría de países, **una herramienta efectiva**, para suscitar externalidades positivas al conjunto de la

sociedad. En nuestra opinión, la introducción tanto a nivel nacional como internacional en el sistema fiscal, de nuevos incentivos en esta materia, focalizados en el ejercicio profesional de los auditores de cuentas, complementaría exitosamente el objetivo marcado por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

3. En muchas ocasiones, no solamente es necesario acondicionar un escenario adecuado, donde se pongan de relieve aspectos tan importantes como la profesionalidad y la responsabilidad para alcanzar el objetivo de una normativa. Es preciso también, realizar un despliegue importante de esfuerzo personal por parte de los sujetos obligados, para cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa, en este caso, en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales. Además, resulta imprescindible, la mayor parte de las veces, aunar esfuerzos económicos para llevar a cabo esta labor. Por ello, creemos necesario proveer de ayuda económica al auditor de cuentas, en el desempeño de su ejercicio profesional, donde actúa como eslabón en la tarea de prevención del delito de blanqueo. En nuestra opinión, es importante que el legislador contemple la opción de **subvencionar determinados costes** en los que el auditor de cuentas se ve en la obligación de incurrir, para el cumplimiento de la normativa antiblanqueo.
4. Con frecuencia la normativa jurídica en materia del blanqueo de capitales focaliza su atención con sumo cuidado en la prevención de este. Es habitual además que, en este tipo de normativa, quede establecido impositivamente, un régimen sancionador al que se ven sometidos determinados sujetos, en base a las exigencias de aquella, lo cual conlleva a menudo que afloren situaciones no del todo justas para los mencionados sujetos obligados. En algunas ocasiones, el establecimiento de estos regímenes sancionadores impone desproporcionadas obligaciones que, dependiendo de cada caso en particular, pueden repercutir de forma negativa profesional y económicamente a estas personas.
5. Los Censores Jurados, aun encontrándose subordinados a un elevado número de obligaciones ante la normativa con respecto a otros sujetos obligados relacionados también en la misma, **tienen idéntico régimen sancionador**. Circunstancia que, en principio, nos parece algo injusta y desproporcionada para estos profesionales.

Obviamente un Censor Jurado, no establece el mismo contacto con una entidad financiera, al auditar las cuentas de esta, que un comerciante de obras de arte con su cliente final. El Censor Jurado en su caso, está expuesto a la revisión de un mayor volumen de información para su verificación, y por tanto a un mayor riesgo de poder incumplir la normativa ante errores involuntarios.

6. Tras la elaboración del presente trabajo y, una vez analizado todo lo comentado en él, nuestra opinión en este sentido es rotunda: todos los mecanismos que puedan ser implementados, tanto por los gobiernos, como por las Administraciones, así como la plena y valiosa colaboración ciudadana, son importantes y, bienvenidos en la lucha por la prevención del blanqueo de capitales. **No sólo los medios económicos son importantes** para intentar ayudar a los sujetos obligados a cumplir con las normas. Medios materiales, como un mejor acceso a determinada información de carácter personal para algunos sujetos obligados por la normativa, sin con ello vulnerar las leyes de protección de datos, ayudarían en ocasiones, a desempeñar esta labor tan importante, como es la prevención de un delito.
7. Es largo el camino que queda por recorrer para conseguir reducir los efectos nocivos del blanqueo de capitales. La posición que ocupa el Censor Jurado en el sistema económico y financiero se torna como una pieza muy efectiva y dinámica para luchar contra ellos. Es importante en nuestra opinión, proveer a estos profesionales de suficientes medios y facilidades para que sean capaces de desempeñar con mayor éxito su papel colaborador en la prevención del blanqueo de capitales. Somos conscientes que, es primordial que las **Administraciones tomen conciencia plena de los problemas** que la normativa antiblanqueo puede llegar a provocar en el sector de la auditoría.
8. Finalmente, y como última conclusión en el análisis de este trabajo, nos gustaría señalar con especial énfasis, nuestra opinión en líneas generales, con respecto a la normativa puesta en vigor en materia de blanqueo de capitales, comentando una vez más, desde nuestro trabajo, que esta está resultando ser un acierto para la consecución del objetivo en la maximización de la prevención de este delito en todo el mundo. Opinamos, no obstante, que la evolución de esta, ha provocado de alguna manera que la expansión del delito crezca cada vez con mayor rapidez,

viéndose no solamente afectadas las economías de muchos países sino también por extensión sectores profesionales que antes no lo estaban.

Como última reflexión por nuestra parte y, de acuerdo a los riesgos y limitaciones a los que se enfrenta el Censor Jurado de Cuentas en cumplimiento de la normativa antiblanqueo, durante el ejercicio de su profesión: ¿tendrá en un futuro próximo el legislador en consideración, valorar nuevamente el duro régimen sancionador que impone a estos sujetos obligados?, o visto de otro modo, ¿es realmente tan desproporcionado el régimen sancionador de la LPBC/FT, desde la óptica del sujeto obligado, teniendo en cuenta la gravedad del delito de blanqueo de capitales?.

## BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO CORDERO, Isidoro. *"Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica."* Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (2009). Pág. 117-138
- DE CUERDA MARTÍN, M. (2017). *"El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales"*. Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, (12), 93-175.
- GÁLVEZ BRAVO, R. (2014). *"Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales."* Barcelona: Bosch Wolter Kluwer. p. 83
- GARCÍA-MONCÓ Martínez, A. En: *"Las obligaciones de información de las empresas en materia tributaria y en el ámbito de la legislación."* Gaceta fiscal. 2012. (323) p 60-74."
- GARCÍA-MONCÓ Martínez, A. En: *"Blanqueo de capitales: régimen general y especial referencia a las obligaciones de los asesores fiscales."* Gaceta fiscal. 2013. (326) p 47-63."
- GARCÍA-MONCÓ Martínez, A., Del Valle, J., Díaz Vales, F., Viñuelas Sanz, M., Zabaleta Díaz, M., Arenas Ramiro, M., & Mir Fernández, C. (Edición 2020). MATERIAS JURÍDICAS. (Madrid: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: PP. 785-824)."
- GAFI: *"Informe de Evaluación Mutua. Medidas Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. España (2014)."*
- LABATUT SERER, G., Bonatti Bonet, F. L., Mena, J.: *"Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas. Ed.12 noviembre 2018, Madrid."*
- MALLADA FERNÁNDEZ, Covadonga. *"Fiscalidad y blanqueo de capitales."* (2012).
- MARTÍN, A. R. F., & Botija, F. G. (2017). *"La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE"*. RUE: Revista universitaria europea, (26), 91-120.
- MEMORIAS de información estadística del SEPBLAC. (Años 2010 a 2018 ambos inclusive).

- MIR FERNÁNDEZ, C. (2018): “Manual de Auditoría y Control Interno”, Capítulo 37 (pp. 1165-1192).
- OLIUS BONSOMS, Yolanda. “*Blanqueo de capitales y su efecto sobre los auditores de cuentas*”. Revista Contable, N. ° 14, Sección Auditoría, septiembre 2013, Editorial Wolters Kluwer España (14) p 82-89.
- PÉREZ RODRÍGUEZ, M. D. (Coord.). (2015). “*Prevención del blanqueo de capitales*” (2a. ed.). Editorial ICB

## COMUNICACIÓN A PONENCIAS

- GARCÍA FRESNO, M: “*jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. En una ponencia que tuvo lugar los días 10 y 11 de febrero de 2020 en el Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD)*”.

## WEBGRAFÍA

“Accountancy Europe”: <https://www.accountancyeurope.eu/>

“Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”: <https://www.boe.es/>

“Agencia Tributaria”: <https://www.agenciatributaria.es/>

“Comisión europea”: [https://ec.europa.eu/spain/home\\_es](https://ec.europa.eu/spain/home_es)

“EUROSTAT”: <https://ec.europa.eu/eurostat/home?>

“Financial Intelligence Units (FIUs)”: <https://www.egmontgroup.org/content/about>

“Fondo Monetario Internacional (FMI)”: <https://www.imf.org/external/spanish/index.htm>

“FUNDAE: Fundación Estatal para la Formación y el Empleo”: <https://www.fundae.es/>

“GAFI in inglés, Financial Action Task Force (FATF)”: <https://www.fatf-gafi.org/about/>

“Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica”: <https://www.gafilat.org/index.php/es/>

“Grupo de Acción Financiera Sudamérica”: <https://www.antilavadodedinero.com/gafisud/>

“Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”: <https://www.icjce.es/>

“Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)” : <http://www.icac.meh.es/>

“Poder Judicial de España” : [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder\\_Judicial](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial)

“SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal” : <http://www.sepe.es/HomeSepe>

“Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)” : <https://www.sepblac.es/es/>

“Tesoro Público” : <https://www.tesoro.es/>

## LEGISLACIÓN

- **“DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. (DO L 284/22 de 12 de noviembre de 2018).”
- **“DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.”
- **“DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.”
- **“DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.”
- **“Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, para trasponer la Directiva de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (BOE núm. 45 de 21 de febrero de 2019).”**

- *“Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (BOE núm. 152 de 23 de junio de 2010) Referencia: BOE-A-2010-9953 ”*
- *“Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999)”.*
- *“Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE) núm. 281, de 24 de noviembre de 1995 Referencia: BOE-A-1995-25444”*
- *“Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE) núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-12887”*
- *“Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 103, de 29 de abril 2010 Referencia: BOE-A-2010-6737”*
- *“Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. (BOE) núm. 160, de 05 de julio de 2003 Referencia: BOE-A-2003-13471.”*
- *“Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 122, de 22 de mayo de 2003 Referencia: BOE-A-2003-102892.*
- *“Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE) núm. 214, de 4 de septiembre de 2018 Referencia: BOE-A-2018-12131”*
- *“Real Decreto-ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, (BOE núm. 78 de 31 de marzo de 2012) Referencia:BOE-A-2012-4441”*
- *“Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. (BOE) núm. 129, de 30 de mayo de 2015 Referencia: BOE-A-2015-5952.”*



- *“Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE) núm. 110, de 6 de mayo de 2014 BOE-A-2014-4742.”*
- *“Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, («Gaceta de Madrid» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882)”*

## **JURISPRUDENCIA**

- *“Sentencia del Tribunal Supremo 501/2019 (Sala de lo Penal, Sección 10), de 24 octubre de 2019 (recurso 1568/2018)”*
- *“Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012 (Sala Segunda de lo Penal), de 5 de diciembre de 2012 (recurso 2216/2011)”*
- *“Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2017, de 8 de junio de 2017 (Recurso de inconstitucionalidad 3856-2012)”*

## **NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA VIGENTES EN ESPAÑA (NIE-ES)**

- *“NIA-ES 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.”*
- *“NIA-ES 240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con respecto al Fraude.”*
- *“NIA-ES 250. Consideración de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en la Auditoría de Estados Financieros.”*
- *“NIA-ES 300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.”*
- *“NIA-ES 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la Entidad y de su entorno.”*
- *“NIA-ES 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.”*
- *“NIA-ES 500. Evidencia de Auditoría.”*
- *“NIA-ES 620. Utilización del Trabajo de un Experto del Auditor.”*